

ES - targeted questions for RoL (Virtual) Country Visit, 2022

Justice Policy and Checks and balances

1. In your written contribution, you mention that efforts continue to proceed with the renewal of the Council for the Judiciary. Could you please provide an update of the situation?

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un mandato constitucional y, en este momento, una necesidad urgente. Su renovación lleva más de 3 años bloqueada en lo que constituye un claro incumplimiento de la obligación constitucional. Así lo destacó el propio presidente del CGPJ en el acto de apertura del año judicial, quien recordó que el cumplimiento de la constitución y las leyes no se puede hacer depender de la conveniencia política.

Por eso, una de las prioridades del gobierno de España ha sido instar a los grupos parlamentarios a llegar a un acuerdo que posibilite lo antes posible esta renovación y abrir canales de diálogo que la permitan. Renovación que es competencia del Congreso y del Senado, lo cual implica que debe darse una mayoría que por el momento ha sido imposible. De conformidad con lo publicado en diversos medios de comunicación, parecería que los cambios en el liderazgo del principal partido de la oposición podrían ayudar a que se retomase este diálogo y pueda producirse una rápida renovación.

2. Art. 159.3 of the Spanish Constitution provides that Members of the Constitutional Court shall be appointed for a period of nine years and shall be renewed by thirds every three years. It is planned that in June 2022 four new members of the Constitutional Court will be appointed: two to be proposed by the Government and the other two by the Council for the Judiciary. Could you please provide some details on what would happen with these appointments if the Council for the Judiciary remains in *ad interim* functions in June 2022?

El art.159 de la Constitución española establece que, de los 12 miembros que conforman el Tribunal Constitucional, 4 son a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5, 4 a propuesta del Senado, por la misma mayoría de 3/5, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del CGPJ. Los magistrados del TC se designan por un periodo de 9 años y se renuevan por terceras partes cada 3 años.

Ya en 2019 se debió haber renovado el tercio cuya propuesta correspondía al Congreso, pero la renovación estuvo bloqueada durante más de año y medio, hasta principios de noviembre de 2021 cuando se alcanzó un acuerdo para la renovación de los 4 magistrados. El próximo mes de junio debería procederse a la renovación del tercio cuya propuesta corresponde al Gobierno y al CGPJ, pero respecto de estos dos últimos magistrados, conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, el CGPJ no podría proponer su nombramiento mientras se encuentre en funciones. Por tanto, la falta de renovación de parte de los magistrados, sin ser una situación inédita, hace aún más

acuciante la necesidad de que se cumpla el mandato constitucional de renovación del CGPJ.

3. In October 2021, the Supreme Court published a report analysing the impact on vacancies in the efficiency of the justice system. What are your views on this report?

El informe de situación de la Sala Primera del Tribunal Supremo “*Propuestas de Actuación. Octubre de 2021*” se refiere a la situación de dicha Sala y, en concreto, a su plantilla de 10 magistrados y magistradas incluido el Presidente y al hecho de que se produjeron dos vacantes por jubilación y solo una de ellas ha sido cubierta.

De nuevo y conforme a lo dispuesto en el artículo 570 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en tanto el CGPJ se encuentre en funciones y no se produzca su renovación, no podrá realizar propuestas de nombramiento de Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo.

Desde el Ministerio de Justicia se ha realizado un gran esfuerzo para minimizar cualquier impacto de esta situación en la eficiencia judicial, cubriendo la totalidad de plazas de su Gabinete Técnico y reforzándolo con plazas adicionales. Así, se han atendido las peticiones de cobertura de plazas referidas al Gabinete Técnico del Tribunal Supremo que es un órgano que asiste a la Presidencia y a sus diferentes Salas en los procesos de admisión de los asuntos de que conozcan, mediante la elaboración de estudios e informes, y presta apoyo a las Salas especiales en el despacho de asuntos que les estén atribuidos (de acuerdo con el artículo 61 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial).

La composición y la plantilla del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, integrado por miembros de la carrera judicial y otros juristas, es la siguiente: un Director y 77 Letrados del Gabinete Técnico, de los cuales 12 serán Letrados Coordinadores (art. 2 de la Orden JUS/468/2019, de 24 de abril). Plantilla que está cubierta sin que existan vacantes.

Junto a esta plantilla “ordinaria” el artículo 61 bis.5 LOPJ establece que: “*Excepcionalmente, por razones coyunturales y debidamente justificadas, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y oída la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, podrá el Ministerio de Justicia adscribir temporalmente, con el límite máximo de un año, un número adicional de miembros al servicio del Gabinete Técnico*”.

En aplicación de dicha previsión, el 25 de enero de 2021, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo acordó la “**propuesta de refuerzo anual de 14 letrados en comisión de servicios con relevación de funciones**” por la que se solicitaba un refuerzo anual de 14 letrados. La petición se basaba, fundamentalmente, en el panorama resultante tras el cese de la actividad judicial motivado por la Covid-19 durante el año 2020, que supuso una caída en la capacidad resolutoria de las distintas Salas del Tribunal Supremo, así como por el incremento del número de nuevos asuntos que ya venía produciéndose desde años anteriores. La solicitud de refuerzos se realizó con arreglo al siguiente desglose:

- 4 letrados o letradas para el área Civil,

- 2 letrados o letradas para el área Penal,
- 4 letrados o letradas para el área Contencioso- administrativa,
- 4 letrados o letradas para el área Social (uno de ellos letrado/a coordinador/a).

Tras el estudio sobre la carga de trabajo de las distintas Salas, a la vista de los datos obtenidos a través de la sección de Estadísticas judiciales del CGPJ y de las Memorias anuales del Tribunal Supremo, por resolución de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia de 20 de abril de 2021 se autorizó hasta el 31 de diciembre de 2021 el nombramiento de 12 letrados y letradas en comisión de servicios con relevación de funciones conforme al siguiente desglose:

- 4 para el área civil
- 2 para el área penal,
- 2 para el área contencioso-administrativa y,
- 4 para el área social (una de ellas como letrado coordinador).

La Dirección del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, con fecha 13 de julio de 2021, comunicó que candidatos provenientes de las carreras judicial y fiscal, letrados de la Administración de Justicia, profesores de Universidad y técnicos de otras Administraciones habían sido seleccionados para ocupar estas plazas, y que tomarían posesión a principios del mes de septiembre.

Por Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2021 se solicitó la prórroga de estas 12 comisiones extraordinarias por un nuevo plazo de 1 año. Prórroga que fue concedida hasta el próximo 31 de diciembre de 2022.

4. The Spanish Judicial Ethics Committee issued in 2021 an opinion on the ethical duties of judges who return to their judicial functions after having held political office. What are your views on this opinion?

El Dictamen (consulta 1/21), de 13 de mayo de 2021, sobre Participación de jueces en política. Principios de independencia e imparcialidad. Deberes éticos de jueces y magistrados que retornan al ejercicio de la jurisdicción tras el desempeño de cargos de naturaleza política, fue elaborado por la Comisión de Ética Judicial del CGPJ, organismo con funcionamiento independiente a los órganos de gobierno del Poder Judicial y creado con la aprobación de los Principios de Ética Judicial para, con ocasión de las consultas que recibe y mediante sus dictámenes e informes, orientar sobre la interpretación de estos principios. Está compuesta por seis miembros de procedencia judicial y un académico experto en Ética o Filosofía del Derecho, todos nombrados por los miembros de la carrera judicial.

Los Principios de Ética Judicial mencionados no tienen carácter normativo ni vinculante, sino que son un conjunto de valores y reglas de los que se dotó la judicatura española, que pretenden servir de guía en el desempeño de la jurisdicción y fortalecer la confianza de la ciudadanía en la justicia al hacer explícitos los modelos de comportamiento con arreglo a

los cuales jueces y juezas se comprometen a cumplir sus funciones. Así, por un lado, el texto desarrolla los principios éticos de independencia, imparcialidad o integridad y recoge modelos de comportamiento relativos a la justicia como prestación de un servicio, como la cortesía, la diligencia y la transparencia.

En este contexto, la Comisión de Ética Judicial en este dictamen concreto emite una opinión en la que pueden distinguirse tres partes. En la primera parte, la Comisión omite deliberadamente entrar en consideraciones de carácter normativo sobre la eventual regulación de la prohibición de regreso al ejercicio de la función jurisdiccional tras el desempeño de cargos de designación política o, en su defecto, de períodos de enfriamiento, por ser las cuestiones de configuración legal del régimen estatutario u orgánico del poder judicial ajenas a la competencia de la Comisión.

La segunda parte del Dictamen se centra en las obligaciones éticas del juez o magistrado que abandona temporalmente la función jurisdiccional para dedicarse a la política, que vendrían a reforzar la confianza de la sociedad en la imparcialidad de la Administración de Justicia: por una parte, la obligación ética de guardar lealtad institucional al Poder Judicial; por otra, el deber de extremar las cautelas que posibiliten precisamente no menoscabar la confianza de los ciudadanos en la independencia e imparcialidad de la Administración de Justicia.

Por último, el Dictamen identifica los factores de riesgo de menoscabo de dicha independencia e imparcialidad, que exigen un mayor deber de cuidado: el grado de exposición mediática o pública durante su desempeño de cargos políticos, la participación activa en mítines, actos de partido o medios de comunicación o el destino desempeñado en el retorno a la jurisdicción.

Sobre las dos cuestiones nucleares en las que se basa el Dictamen, relacionadas con principios éticos de los que los Jueces y Magistrados se han dotado, no cabe emitir ninguna opinión, por ser ámbitos ajenos al poder ejecutivo.

En cuanto a la posibilidad de regular la prohibición de regreso a la jurisdicción de aquellos jueces y magistrados que hayan desempeñado cargos políticos o, en su defecto, de períodos de enfriamiento, el planteamiento de una regulación deberá venir precedida probablemente de un proceso de reflexión en el seno del propio órgano de gobierno de los jueces, y de estudio.

5. Could you please provide an update on developments, if any, related to the statute of the prosecution service?

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal fue aprobado por la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, y ha sido objeto de sucesivas reformas, en 2003 y singularmente en 2007. Esta última dota de una nueva realidad institucional al Ministerio Fiscal, adaptándolo al moderno Estado social y democrático de Derecho, y de una nueva realidad funcional, con la asunción de importantes objetivos y competencias en aras de una mayor cercanía a la ciudadanía, para dar respuesta a las nuevas exigencias, en especial de un derecho penal cada vez más conectado con otras áreas normativas de nuestro ordenamiento jurídico.

Por otro lado, la Fiscalía Europea, que comenzó su actividad en el año 2021, y el futuro cambio legislativo derivado de la proyectada nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal afectarán de manera esencial a la actual estructura y organización del Ministerio Fiscal y harán necesario un nuevo Estatuto orgánico que, desde su posición constitucional entre los poderes del Estado, atienda a su integración con autonomía funcional en el Poder Judicial.

Por otra parte, se está tramitando un nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal que sustituirá al aprobado mediante Decreto 437/1969, de 27 febrero, previo a la Constitución de 1978. Tras la realización de los trámites preceptivos, el proyecto de nuevo Reglamento se remitirá al Consejo de Ministros para su aprobación y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado.

6. Could you please provide an update on the status of the laws on procedural, organisational and digital efficiency of the justice system (in particular of the procedural steps that have taken place since January 2022)?

La elaboración y tramitación de los tres anteproyectos de leyes de eficiencia se está realizado conforme al artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno:

- **Anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal:** el trámite de consulta pública se realizó entre los días 8 y 23 de junio de 2020, elevándose el texto al Consejo de Ministros el 10 de diciembre del mismo año. Posteriormente, el trámite de audiencia e información pública se celebró entre los días 21 de enero y 11 de febrero de 2021 y se solicitó dictamen del Consejo de Estado el 1 de diciembre del pasado año que ha sido recibido el 11 de marzo de 2022.
- **Anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia,** por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para la implantación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios: se realizó el trámite de consulta pública, entre el 10 y el 25 de noviembre de 2020, se elevó al Consejo de Ministros el 20 de abril de 2021 y, posteriormente, se celebró el trámite de audiencia e información pública, entre el 5 y el 26 de mayo de 2021. Se solicitó dictamen al Consejo de Estado el 3 de febrero de 2022, recibido el 11 de marzo.
- **Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital:** el trámite de consulta pública se realizó entre los días 8 y 23 de junio de 2020, elevándose el texto al Consejo de Ministros el 19 de octubre de 2021. Posteriormente, se celebró el trámite de audiencia e información pública entre los días 2 y 22 de noviembre de 2021. Actualmente, el texto está en fase de recepción de informes preceptivos.

7. Could you please provide details on specific and concrete measures aimed to improve the interoperability between the IT management systems used in the different Autonomous Regions?

En primer lugar, se ha de tener en cuenta que la interoperabilidad abarca distintos proyectos que ya están posibilitando una interconexión de 360 grados. El objetivo es construir un modelo en el que los sistemas de gestión procesal sean completamente interoperables no sólo entre ellos dentro del ámbito judicial, sino también con el resto del ecosistema digital del país, tales como Registros Civiles, Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, Institutos de Medicina Legal, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, instituciones penitenciarias, profesionales de la justicia, Administraciones Públicas y demás colectivos que se relacionen con la Administración de Justicia.

Para alcanzar este ecosistema de interoperabilidad plena se está trabajando de manera decidida para crear un marco jurídico sólido **incluyendo dicha interoperabilidad dentro del Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital por ser uno de los proyectos de transformación digital de la justicia que están logrando mejorar la eficiencia de este servicio público.**

Sobre este particular, ya el art. 1 del Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital para el Servicio Público de Justicia señala como principio que rige la norma el aseguramiento de *“la interoperabilidad de los datos, informaciones y servicios que gestione en el ejercicio de sus funciones”*, para elevarlo posteriormente, en el art. 4, a la categoría de *“servicio público homogéneo”* al ciudadano en todo el territorio español.

El anteproyecto establece, en consecuencia, la obligación de interoperabilidad de todos aquellos sistemas que por razón de sus funciones o competencias *“se relacionen directamente con la Administración de Justicia, con independencia del lugar donde estén radicadas”* (tribunales, oficinas judiciales y fiscales, Institutos de Medicina Legal, oficinas de asistencia a víctimas, etc.), sistemas respecto de los cuales también se establece la interoperabilidad con los del resto de Administraciones Públicas.

En concreto, los servicios que crea el anteproyecto (Carpeta Justicia, Registro Electrónico Común de la Administración de Justicia, Punto Común de Actos de Comunicación, entre otros), nacen ya con esa característica de interoperables.

Esta interoperabilidad se consigue mediante un intenso trabajo diario de cogobernanza y de diálogo en el marco del órgano de cooperación en materia de Administración Judicial Electrónica, creado por la Ley 18/2011, y cuya regulación se actualiza en el art. 87 del

Anteproyecto, que es el Comité Técnico Estatal de Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), siendo el Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (EJIS), regulado en el art. 90 del mismo texto, la herramienta que permite el cumplimiento del Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, conformado por el conjunto de normas e instrucciones técnicas de interoperabilidad y seguridad aprobadas por el CTEAJE.

En este contexto tecnológico y normativo, el Ministerio de Justicia tiene previsto tiene previsto poner en marcha el **proyecto HUB Interoperabilidad Judicial** dentro del cual ya han comenzado los intercambios de Expedientes Judiciales Electrónicos entre distintos sistemas de gestión procesal de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia. Desde enero de 2021, hasta la fecha del informe se han realizado un total de 56.023 itineraciones al Tribunal Supremo por parte de distintas Comunidades Autónomas, de entre las que tienen las competencias transferidas, destacan la Comunidad de Madrid y Cataluña.

Este proyecto es una realidad gracias a la aplicación del **principio de cogobernanza** basado en la idea de colaboración del Ministerio de Justicia con las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia, que se lleva a cabo en el seno del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), y que está posibilitando que todas las Administraciones Públicas trabajen en una única dirección para mejorar la justicia a través de la tecnología.

Para poner en marcha todos los proyectos de interoperabilidad se ha realizado una importante inversión presupuestaria cuya fuente de financiación principal proviene de **los Fondos Next Generation EU**. En concreto, se van a destinar **34.100.000 €** procedentes de los Fondos Next Generation durante el primer año (31.350.000€ destinados a Comunidades Autónomas y 2.750.000€, al Ministerio de Justicia) y anualmente para el mantenimiento de los sistemas se va a realizar una inversión de 550.000€, que provienen del presupuesto ordinario del Ministerio de Justicia.

No obstante, tal como se ha señalado, la interoperabilidad abarca diversos proyectos que están logrando tanto la interconexión de los sistemas internos de la Administración de Justicia, como la que se produce entre esta Administración con el resto de Administraciones Públicas. Muestra de esto último es el proyecto de **integración entre el Sistema de Gestión Procesal, el Sistema de Comunicaciones Electrónicas LexNET y el Sistema de Intercambio de Registros (SIR)**, que, desde enero de 2021, ha permitido el **envío de 92.303 oficios desde los órganos judiciales a las Administraciones Públicas**.

Otra muestra de éxito en el ámbito de la interoperabilidad es el proyecto de **envío de expedientes administrativos a través de INSIDE**, habiéndose realizado desde enero del año

pasado el envío de **121.160 expedientes**, destacando las Comunidades transferidas de Andalucía y Principado de Asturias.

Por último, puede destacarse el proyecto interoperabilidad entre la **Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHÚ)** y la Sede Judicial Electrónica, que facilita a la ciudadanía el acceso a sus notificaciones emitidas por los diferentes organismos emisores de las Administraciones Públicas y de los órganos judiciales. La publicación en DEHÚ se realiza a través la Sede Judicial Electrónica y hasta el momento abarca el territorio Ministerio, y las Comunidades de Asturias y La Rioja. Se han realizado **cerca de tres millones de actos de comunicación**.

Por último, puede mencionarse por su importancia el proyecto **HUB Interoperabilidad Judicial**, que consta de 3 fases:

- Fase 1: Intercambio de información a través de una herramienta independiente (ACCEDA). Es la fase actual.
- Fase 2: Interoperabilidad entre sistemas basada en un subconjunto mínimo común de metadatos definidos en la Normativa Técnica del CTEAJE.
- Fase 3: Interoperabilidad entre sistemas basada en el modelo completo de metadatos definidos en la Normativa Técnica del CTEAJE y orientado a la puesta a disposición de la información.

8. In your written contribution, you mention that a Working Group has been set up to discuss the reform of the Code of Criminal Procedure. Could you please provide an overview on the main lines of discussions within the Working Group? Could you also please provide an update on the planned timing of adoption of the reform?

El grupo de trabajo interinstitucional tiene por objeto articular la participación de las instituciones que representan a los más importantes operadores jurídicos (Fiscalía General del Estado, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de Procuradores de España y del mundo académico) para la revisión y mejora del texto, al objeto de que la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal sea producto de un diálogo y consenso con todos los miembros de la comunidad jurídica.

En el grupo se debaten las propuestas realizadas por estas instituciones con el objetivo de integrarlas en la nueva regulación del proceso penal.

Las principales líneas de debate son las competencias del Fiscal investigador y del Juez de Garantías, así como el ajuste del proyecto con otros proyectos en curso como las normas procesales de eficiencia (organizativa y digital), que buscan la modernización de los procesos.

En relación al calendario, se prevé que el CGPJ remita su informe preceptivo no vinculante a finales del mes de mayo. Mientras tanto, además de celebrarse las reuniones del grupo de trabajo, que finalizarían en abril, se están analizando las más de 1.400 aportaciones recibidas durante el trámite de audiencia pública para valorar su incorporación al texto. De acuerdo con el calendario actual, se calcula que la revisión y modificación del texto estará terminada en el mes de julio.

9. Could you please expand on possible challenges to fill judicial posts in certain areas?

Los puestos en la carrera judicial se proveen con carácter general mediante **el sistema ordinario de concurso** (art. 326.2 de la LOPJ). Aunque en menor número, también pueden cubrirse puestos a través de procesos de especialización. Por lo tanto, con carácter general, son los miembros de la carrera judicial quienes solicitan el destino que prefieren de entre las plazas vacantes que les son ofrecidas. Se trata, no obstante, de un proceso continuo en el que las nuevas plazas vacantes son de nuevo ofertadas al objeto de que puedan producirse cambios de destinos que, si bien vienen motivados por los intereses particulares de los participantes en los concursos- que determinan la elección de unas plazas frente a otras- garanticen la adecuada prestación del Servicio Público de Justicia.

Asimismo, junto con **las plazas que se cubren** anualmente por los **jueces y juezas procedentes de la Escuela Judicial**, existen otras figuras que permiten garantizar una amplia cobertura de vacantes. Dichas figuras son:

- Los **jueces y juezas de adscripción territorial** (introducida en el ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre) que ejercen labores jurisdiccionales en plazas que se encuentran vacantes o cuyo titular esté ausente por cualquier circunstancia, con el objetivo de garantizar la agilización de la Justicia;
- Los **jueces y juezas sustitutos/as**, profesionales de la Justicia no pertenecientes a la Carrera Judicial que, previa participación en una convocatoria pública de plazas, puede ser llamados a ejercer la función jurisdiccional.

Que existan temporalmente vacantes no significa por tanto que existan plazas vacías. Finalmente, y como continuación de lo señalado en el ejercicio anterior del Mecanismo del Estado de Derecho, este año se ha proyectado la creación de 70 nuevas unidades judiciales al objeto de adecuar la planta judicial a las necesidades derivadas de la pandemia para garantizar la efectividad en la protección de los derechos de la ciudadanía.

10. **(it could be answered in written form)** In September 2021, Law 8/2021 on the support to disabled people on the exercise of their legal capacity entered into force. Could you please provide an overview on the main changes brought by this law?

El plan Justicia 2030 plantea un ambicioso cambio en el ámbito de la Justicia, orientándola al servicio público y reformándola para maximizar su eficiencia, mejorando a su vez tanto la tutela judicial efectiva como la seguridad jurídica. En concreto, dentro del citado plan se encuentra el proyecto de personas vulnerables, el cual se divide a su vez en dos subproyectos: personas con discapacidad y personas mayores y muy mayores.

La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica modifica tanto la Ley de Enjuiciamiento Civil como la Ley de Jurisdicción Voluntaria, y, entre otros aspectos, incluye en ambas leyes un artículo 7 bis que ya recoge la figura del facilitador, estableciendo en el apartado 2º que *“Las personas con discapacidad tienen el derecho a entender y ser entendidas en cualquier actuación que deba llevarse a cabo.”* y en la letra c) *“Se permitirá la participación de un profesional experto que a modo de facilitador realice tareas de adaptación y ajuste necesarias para que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida”*. La Directora General del Servicio Público de Justicia es, además, vocal del Consejo Estatal de Discapacidad.

Además, en relación con lo indicado en la respuesta a la pregunta número 7 de este cuestionario, para conseguir la interoperabilidad, orientación al dato y una revisión de las medidas de tutela más rápida y efectiva, el Ministerio está avanzando en la automatización de las actuaciones relacionadas con la nueva Ley 8/2021 para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, de cara a lograr una mayor agilidad en los procesos de revisión de medidas de tutela en aquellos casos (aproximadamente el 80% de los casi 300.000 objeto de revisión) donde la situación clínica del tutelado no es susceptible de mejora (trastornos neurocognitivos, alzheimer, etc.).

11. (it could be answered in written form) According to the information available to the Commission, the Government is working on a draft law on the right of defence. Could you please provide an overview on this initiative and its timing?

El objeto primordial de esta ley es potenciar las garantías de la ciudadanía para un mejor ejercicio de su derecho de defensa, y la regulación de la asistencia jurídica, que se incluye en su función instrumental para la realización de este derecho de la ciudadanía, y la consecución de la tutela judicial efectiva. Este texto está muy estrechamente relacionado con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y su contenido dependerá de cómo avancen estos trabajos.

El anteproyecto de ley de derecho a la defensa se sometió a consulta pública desde el 28 de octubre al 12 de noviembre de 2021.

12. (it could be answered in written form) Could you please provide details on the scholarship programme to support the access to the judicial and prosecutorial careers?

El Ministerio de Justicia aprobó el 28 de diciembre de 2022 un Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024 que, entre otras, incluyó una línea de becas para la preparación de las pruebas de acceso a las siguientes carreras y cuerpos:

- Carreras Judicial y Fiscal: 173 becas.
- Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia: 60 becas.
- Cuerpo de Abogados del Estado: 12 becas.

La dotación global de las becas es de 1.619.940 euros, que se financiarán con cargo al presupuesto de gastos del ejercicio de 2022 del Centro de Estudios Jurídicos. En total, se convocarán 245 becas, con un importe individual de 6.611 € anuales.

El objetivo es la eliminación de barreras socio-económicas que puedan limitar el acceso a los cuerpos indicados, y afectar a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Este diagnóstico se basa (entre otros elementos) en los resultados de las encuestas hechas en los cursos selectivos de acceso a la Carrera Fiscal y al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, en la parte relativa a los costes de la preparación de oposiciones.

El criterio principal de concesión será el de la menor renta familiar. Se reservará un cupo para personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, y se tendrá en cuenta la condición de víctima de violencia de género y/o de terrorismo, así como la superación de exámenes propios del proceso selectivo en el que se participe.

Las becas podrán renovarse por un máximo de tres ocasiones, siempre que se cumplan los requisitos, entre los que se encuentran, además de los previstos en la Ley General de Subvenciones, el de preparar la oposición bajo la dirección de personas que pertenezcan a la carrera o cuerpo a la que se aspira a acceder, o bien de un centro de preparación.

La coordinación e impulso del proyecto está residenciada en el Organismo Autónomo Centro de Estudios Jurídicos, que, bajo la dirección estratégica de la Secretaría de Estado de Justicia, está trabajando de manera coordinada con otras unidades del Ministerio. Además, se cuenta con el apoyo de otros Ministerios, como el de Educación y Formación Profesional, dada su experiencia en proyectos de estas características.

Se está trabajando en tres planos: normativo, digital y de recursos humanos:

El 11 de marzo de 2022 se publicó el texto de la orden ministerial de bases para la concesión de las becas en la página web del Ministerio de Justicia, en cumplimiento del trámite de audiencia e información pública previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Transcurrido el plazo de quince días hábiles, y a results de dicho trámite, la orden se firmará y publicará en el BOE.

Una segunda orden ministerial establecerá la obligatoriedad del uso de medios electrónicos para participar en las convocatorias de becas. La simplificación de la presentación y gestión de las solicitudes en un sistema electrónico único agilizará la tramitación, aumentará las garantías y facilitará la accesibilidad de las personas interesadas.

Con este objeto se está desarrollando un programa informático para la gestión de solicitudes y pagos. Sin perjuicio de ello, se constituirá una unidad de tramitación específica con los medios humanos necesarios.

En el segundo trimestre de 2022 se publicará la resolución de convocatoria de becas, con la previsión de que el proceso de concesión se desarrolle en un máximo de cuatro meses.

Anti-corruption

13. In the written contribution you mention that despite not having a national anti-corruption strategy, both the 2019 National Strategy against Serious and Organised Crime and the 2021 National Security Strategy identify corruption as a tangible threat to security. Could you please highlight any developments in practice as regards the measures being implemented to fight against crimes related to corruption, including economic crimes? Have you encountered any particular challenges as regards the implementation since July 2021?

En relación con el proyecto “**Fortalecimiento de la Estrategia Nacional Antifraude en España**” que está llevando a cabo el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude con la Asistencia Técnica de la OCDE, financiada por la Dirección General de Apoyo a las Reformas Estructurales de la Comisión Europea, se indica lo siguiente:

- a) Se prevé que un borrador de la Estrategia Nacional Antifraude esté preparado en julio-agosto de 2022.
- b) El **ámbito en materia** de PREVENCIÓN del fraude y la corrupción, de forma generalizadas (gasto estatal financiado y no cofinanciado) ha sido AMPLIADO más allá de los intereses financieros de la Unión Europea, dotándola de un carácter generalista en la lucha contra la corrupción, como consecuencia del acuerdo alcanzado el **15 de marzo de 2022**, con motivo de la reunión de la COMISIÓN COORDINADORA DE LAS INSPECCIONES GENERALES DE SERVICIOS DE LOS MINISTERIOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, presidida por la Secretaria de Estado de Función Pública, integrando en la citada Estrategia los trabajos relativos a los sistemas preventivos de integridad para la Administración General de Estado derivados de los compromisos asumidos como consecuencia de los compromisos del IV Plan de Gobierno Abierto.
- c) En materia de lucha contra el fraude, corrupción, malversación, blanqueo de capitales, crimen organizado y otros delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude mantiene relaciones operativas y de coordinación la **Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y la Fiscalía Europea**, especialmente con esta última, desde su entrada en funcionamiento operativo con fecha de 1 de junio de 2021.

A mayor abundamiento, **representantes de ambas Instituciones forman parte de la Comisión para la elaboración de la Estrategia Nacional Antifraude**, creada en el seno del Consejo Asesor para la Prevención y Lucha contra el fraude a los intereses financieros de la Unión Europea, y que va a asistir y asesorar al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en la elaboración de la Estrategia.

Con fecha de **15 y 16 de marzo de 2022** se ha celebrado la primera reunión de la nueva Red de Autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes contra la corrupción (**Red GloBE**), creada bajo el auspicio de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que preside ESPAÑA, a través de representantes del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude junto con representantes de la Policía Nacional (UDEF) y de la Guardia Civil.i (Unidad Técnica de Policía Judicial).

La **Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA)** del Ministerio de Justicia participa en la concertación de las mejores prácticas al amparo de la Orden PCI/161/2019, de 21 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, por el que se aprueba la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave; de la Orden PCI/179/2019, de 22 de febrero, por la que se publica la Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2019, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional; así como de cualesquiera otras que se puedan consensuar en la amplia variedad de los foros nacionales e internacionales en los que se concurra. Todos estos planes, desarrollados bajo la denominación de PENCEIL (Plan Estratégico de Lucha contra el Enriquecimiento Ilícito) y PENCFIT (Plan Estratégico Nacional contra la Financiación del Terrorismo), entre otros, se traducen en diversas y concretas líneas de acción en los que la recuperación y gestión de activos procedentes de los delitos relacionados con la corrupción se ponen en la práctica en coordinación con otras acciones de variada naturaleza

Si bien España no dispone de manera específica de un documento que recoja propiamente una estrategia, plan o ley integral contra la corrupción, las medidas y actuaciones detalladas a lo largo de todo el presente documento, evidencian una orientación estratégica que se basa en líneas de actuación identificables y bien definidas y que parten por supuesto de disponer de un marco normativo alineado con los estándares y compromisos asumidos a nivel internacional.

Dichas líneas de actuación son las siguientes:

- ✓ Priorización estratégica.
- ✓ Especialización.
- ✓ Formación.
- ✓ Protocolos de actuación.
- ✓ Actuación operativa.
- ✓ Cooperación institucional.
- ✓ Colaboración internacional.
- ✓ Generación de valor.
- ✓ Transparencia y rendición de cuentas.

A partir de lo anterior, se destacan entre otros las siguientes actuaciones consideradas avances en el ámbito estratégico:

- Ya se estableció que la **Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la delincuencia grave 2019-2023** reconoce y establece como un objetivo la lucha contra todas las formas de criminalidad, haciendo una referencia específica a los delitos relacionados con la corrupción y la delincuencia económica.

En desarrollo de la citada estrategia, el Consejo de Seguridad Nacional aprobó el 18 de noviembre de 2021 el “**Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos (PENTRA) 2021-2023**”, que fue presentado por el Secretario de Estado de Seguridad el día 12.01.22 en el seno de la reunión de la Relatoría Nacional contra la trata de Seres Humanos.

En la elaboración del plan han participado expertos de siete departamentos ministeriales, así como del Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. Este grupo de trabajo ha contado con la colaboración y aportaciones de la Representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); la Oficina para España de la Organización Internacional del Trabajo; la Organización Internacional para las Migraciones en España, así como la Red Española contra la Trata de Personas, que aglutina a más de treinta organizaciones vinculadas a la lucha contra la trata y a la asistencia a sus víctimas.

Igualmente, está prácticamente finalizado el “**Plan Estratégico Nacional Contra el Enriquecimiento Ilícito**” (PENCEIL) (bianual) el cual se prevé se apruebe antes del final del año 2022 y responde al compromiso del Gobierno para dotar al marco normativo español de herramientas que permitan una mayor efectividad de la lucha contra las redes o individuos que se lucran del beneficio económico procedente de cualquier forma de delincuencia.

- El Ministerio del Interior ha participado en la elaboración **del Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso, relaciones laborales obligatorias y otras actividades humanas forzadas**, publicado en el BOE del día 24.12.21 mediante Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de diciembre de 2021.

El Plan da cumplimiento a lo previsto en el Protocolo de 2014 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que fue ratificado por España el 12 de diciembre de 2017 y entró en vigor el 20 de septiembre de 2018 y que interesa de los estados que lo suscriban desarrollar un plan de acción nacional para lograr la erradicación del trabajo forzoso

- Desde el Ministerio del Interior se ha continuado desarrollando el **Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar** contra el tráfico de drogas, que presta especial atención a la dimensión económica del delito y a la corrupción.

Dicho Plan se constituyó mediante la Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad número 9/2018, de 24 de julio, articulado en torno a un conjunto de medidas urgentes y de impacto a desarrollar durante el año 2018, y otras de mantenimiento y refuerzo durante el año 2019. Se amplió mediante la Instrucción núm. 3/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad, para el periodo 2020-2021, actualizando el mismo y contemplando nuevas medidas y previsión económica. Finalmente, mediante la Instrucción núm. 3/2022 de la Secretaría de Estado de Seguridad, se aprobó con fecha 07.03.22 el **III Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar 2022-2023**.

- Del mismo modo, mediante la instrucción 7/2021, de la Secretaría de Estado de Seguridad de 21.12.2021, se aprobó el **Plan Nacional de actuación contra la criminalidad organizada asociada a la producción y tráfico de marihuana**, que tiene por objeto mejorar la respuesta nacional ante dicha amenaza.
- El **Plan Estratégico de la Policía Nacional 2022-2026** recogerá como objetivo específico "Proteger el correcto funcionamiento de las Instituciones combatiendo la corrupción en todos los ámbitos" siendo los indicadores relevantes: Porcentaje de investigaciones judicializadas con respecto al total de las investigaciones por corrupción pública, Número de investigaciones de corrupción privada y Número de investigaciones por corrupción en transacciones comerciales internacionales.

Por otra parte, centrado en la generación de entornos seguros en los que se garantice la convivencia y se genere valor público, el **Plan Estratégico de la Guardia Civil 2021-2024**, ha establecido en la Línea Estratégica (LE) N°9 de "Lucha contra el crimen organizado y delincuencia grave", varias acciones en este ámbito, entre las que destacan la investigación de delitos como el fraude en subvenciones, el blanqueo de capitales y la corrupción pública. Más concretamente contempla un objetivo específico consistente en la persecución de las diferentes formas de corrupción que afecten a las Instituciones públicas y cuyos indicadores de medición se basan principalmente en el número de operaciones realizadas y de personas detenidas o investigadas por delitos de corrupción pública.

- Se han iniciado los trabajos para la elaboración de una **Estrategia Nacional Antifraude** coordinados por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA). Por la Comisión Permanente del Consejo Asesor de Prevención y Lucha contra el Fraude a los intereses financieros de la Unión Europea, se procedió a la designación de los miembros de una Comisión para la redacción de la Estrategia Nacional Antifraude (la cual se había constituido el 6 de junio de 2021 por el Pleno del Consejo), que conforma un grupo de trabajo del que forman parte miembros de las FCSE. La elaboración de la Estrategia se va a llevar a cabo mediante un proyecto financiado por la Comisión Europea y con el apoyo técnico de la OCDE que se denomina *"Fortalecimiento de la Estrategia Nacional Antifraude en España"*.

14. Could you please give an update on the state of play of the implementation of the new system of access and use of criminal information? When did the system start operations and have you encountered any challenges so far?

La ORGA tiene prácticamente concluida la Plataforma AVIZOR, un esquema de gestión digital interoperable de casos que garantiza, entre otras muchas disponibilidades, la formación automatizada de los catálogos nominales de bienes y derechos de las personas investigadas (los poseídos legalmente según inscripciones en los registros públicos y privados) a fines de su posible embargo o decomiso en la escena nacional e internacional. Este sistema, que integra y analiza las informaciones procedentes de las más diversas fuentes, facilita igualmente los análisis que permitirían durante el proceso penal el conocimiento de la titularidad real de los bienes y derechos que hayan sido sometidos a transformación, ocultación y blanqueo. Este sistema es utilizado también por las Fuerzas de Seguridad y de la Agencia Tributaria que se integran en la ORGA.

Uno de los mayores desafíos es la confiscación y recuperación del producto de delitos relacionados con la corrupción. España está muy involucrada en diferentes iniciativas para mejorar los mecanismos nacionales e internacionales de recuperación de activos y de investigación financiera.

Sobre esta base, el Ministerio del Interior se encuentra coordinando los trabajos para la transposición de la **Directiva 2019/1153 sobre el establecimiento de normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales**, con objeto de regular el acceso a información financiera y bancaria, para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales graves.

Si bien el plazo de transposición finalizó en agosto de 2021, de acuerdo al procedimiento legislativo español, los últimos trámites derivan de la emisión de un dictamen del Consejo de Estado (de fecha 24 de febrero de 2022) que no formula ninguna observación esencial).

Está pendiente, que en breve (no se ha hecho antes a partir de la recepción del citado dictamen por cuanto todos los servicios Jurídicos del Ministerio del Interior han estado trabajando en la elaboración de un procedimiento especial para la acogida de personas desplazados con motivo de la crisis de Ucrania) se enviará para sometimiento, en segunda vuelta, a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y al Consejo de Ministros y posterior emisión al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.

Igualmente, el Gobierno ya ha aprobado el **Anteproyecto de ley que protege a los alertadores de corrupción, mediante la trasposición de la Directiva 2019/1937, conocida como Directiva ‘Whistleblowing’**. No se limita solo a las infracciones que impone el catálogo de la Directiva de la UE, sino que está previsto ampliarlo al abanico del derecho nacional, sin perjuicio de lo que decida finalmente el Parlamento español.

Se destaca igualmente que, si bien el plazo de trasposición venció el pasado 17 de diciembre, 24 de los 27 EM no han llegado a tiempo. Solo Suecia, Malta y Portugal lo han conseguido.

15. In your written contribution, you mention that the Ministry of Interior is considering the implementation of necessary reforms in view of addressing obstacles to the investigation and sanction of high-level corruption cases:

Es preciso matizar que la respuesta a esta cuestión hay que ponerla en relación con la número 8.

De este modo, no se trata de que el Ministerio del Interior esté considerando de manera particular dicha iniciativa, sino que hay que enmarcarla en los trabajos generales de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que está coordinando el Ministerio de Justicia, en colaboración con diferentes Departamentos Ministeriales (incluido el Ministerio del interior) y otros actores y operadores (Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Colegios de Abogados y Procuradores, ámbito académico...etc.)

El objeto principal de la reforma en lo que al ámbito de Ministerio del Interior se refiere, sería revisar las figuras y herramientas procesales de investigación criminal y programas de apoyo (como por ejemplo los referidos al testigo protegido y el agente encubierto), para abordar las tramas criminales organizadas donde surjan, entre otros, delitos complejos relacionados con la corrupción. Todo ello con las necesarias garantías jurídicas para las partes y de acuerdo a la normativa de referencia española e internacional y lo marcado por la jurisprudencia.

16. In procedural terms: what is the state of play of this review and would it be followed by legislative amendments to the criminal legal framework?

Se ha avanzado en la normativa relativa a la lucha contra el fraude y la delincuencia económica, conductas muy vinculadas de forma directa o indirecta a la corrupción.

Entre ellas:

- La **Estrategia nacional de prevención y lucha contra el fraude**, reforzará la base de respuesta ya disponible para prevenir los riesgos citados y abordar la corrupción.
- La **Ley Orgánica 6/2021**, de 28 de abril ha modificado los artículos del Código Penal que regulan el delito de blanqueo de capitales para trasponer al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal. La reforma ha consistido en incluir dos nuevas agravantes para el

citado delito, en los casos de que los bienes objeto de blanqueo procedan de los delitos de trata de seres humanos, delitos contra los ciudadanos extranjeros, prostitución, explotación sexual y corrupción de menores, así como aquellos delitos vinculados a la corrupción en los negocios; así como cuando el sujeto activo del delito sea sujeto obligado por la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

- La **Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal**, ha adoptado medidas legislativas para reforzar las capacidades de los órganos del Estado para la prevención y represión de este tipo de conductas (fraude fiscal).

En particular, la Ley 11/2021 contiene modificaciones en diversas normas, principalmente en materia tributaria, con una finalidad doble. Por una parte, para proceder a la incorporación del Derecho de la Unión Europea al ordenamiento interno en el ámbito de las prácticas de elusión fiscal. Por otra, para introducir cambios en la regulación dirigidos a asentar unos parámetros de justicia tributaria y facilitar las actuaciones tendentes a prevenir y luchar contra el fraude reforzando el control tributario.

En un contexto en el que la globalización de la economía, los nuevos modelos de negocios y la aparición de avances tecnológicos disruptivos están suponiendo importantes retos, la prevención y lucha contra el fraude fiscal exigen de una estrategia integral que además de un marco legal apropiado incluya una Administración Tributaria dotada de los medios necesarios para optimizar sus resultados.

Ello hará necesario que las modificaciones legales aquí contenidas deban de acompañarse de determinadas medidas organizativas y operativas que, adecuando a la Administración Tributaria del Estado, esto es, Agencia Tributaria, Dirección General de Tributos y Tribunales Económico-Administrativos, al contexto económico, la sitúen al nivel de los países más avanzados (esencialmente aumentando las ofertas de empleo público para el incremento de personal).

En el ámbito particular de las FCSE, y además de lo ya referido en preguntas anteriores, se pueden citar, entre otras, las siguientes las **medidas concretas** que se están desarrollando para reforzar la prevención del fraude y la corrupción:

- En el marco nacional, con motivo de la puesta en funcionamiento de la Fiscalía Europea (European Public Prosecutor's Office- EPPO), se han designado tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil sendos puntos de contacto centralizados (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal y unidad técnica de Policía Judicial, respectivamente) como canales de relación con dicha Fiscalía Europea.

Igualmente, se ha establecido una estructura descentralizada de expertos en materia de crimen organizado y delincuencia grave en todas las Unidades de Policía Judicial distribuidas por todo el territorio nacional, como canal de comunicación con los Fiscales Europeos Delegados en el desarrollo de cada las investigaciones. Estos puntos de contacto serán los responsables de notificar a la Fiscalía Europea el inicio de cualquier investigación en este ámbito o de cualquier actuación realizada en flagrante delito o por razones de urgencia.

Por ello, se han elaborado protocolos de actuación, con el fin de obtener una mayor coordinación de las investigaciones a nivel periférico y central, así como para una mayor agilidad y eficacia en las comunicaciones con la Fiscalía Europea.

- Las FCSE mantienen una colaboración constante con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) a través del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) de la Intervención General de la Administración del Estado (IAGE), que actúa como AFCOS nacional encargado de coordinar las acciones encaminadas a proteger los intereses financieros de la Unión Europea contra el fraude en colaboración con la OLAF.
- La cooperación de las FCSE con el SNCA-AFCOS se realiza sobre la base de un protocolo general de actuación que tiene por finalidad fijar el marco de colaboración en materia de prevención, detección investigación del fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea en sus respectivos ámbitos de competencia.
- Las FCSE españolas están participando en una operación para la protección de los Fondos Next Generation EU a nivel europeo: **Operación SENTINEL**. La misma fue lanzada por parte de EUROPOL en octubre de 2021 y en ella participan 19 países de la UE, así como la Fiscalía Europea, la OLAF y EUROJUST.
- El nuevo **Ciclo Político de la UE para el periodo 2022 – 2025** ha adoptado el nombre de EMPACT 2022+, consolidándose como el buque insignia de la lucha contra el crimen organizado a nivel de la UE.

Tras la elaboración del SOCTA 2021, aprobación de las Prioridades en el COSI y establecimiento de los objetivos estratégicos plurianuales y Planes de Acción Operativos, se han definido los roles principales (Driver y Co-Driver) de cada uno de los EMPACT (Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas delictivas, en los que los Estados miembros, las agencias de la UE y otros agentes colaboran estrechamente para hacer frente a estas importantes amenazas delictivas utilizando herramientas como la formación policial y las acciones operativas conjuntas para desmantelar las redes delictivas, sus estructuras y sus modelos de negocio.

España, continúa asumiendo un rol muy destacado respecto de su participación en las distintas acciones operativas previstas y Joint Action Days (Días de Acción Operativos).

Concretamente, para ese período, y además de participar en todas las prioridades, liderando y co-liderando múltiples acciones operativas (OAs), las FCSE de España va a coliderar con EUROPOL en el 2022 (así está previsto ya en la OAP) una acción operativa del EMPACT de Finanzas Criminales, Blanqueo de Capitales y Recuperación de Activos (CF-MLAR) relativa a casos de corrupción en países de la Unión Europea.

- Las FCSE están manteniendo constantes contactos y comunicaciones con la **Fiscalía Europea** al objeto de coordinar las actuaciones, especialmente ante la llegada de los fondos Next Generation. Se han establecido puntos de contacto para canalizar la colaboración.
- La Presidencia saudí del G20, el año pasado, propuso la creación de una Red Operativa Mundial de Autoridades Encargadas de la Aplicación de la Ley contra la corrupción. Bajo la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción esta propuesta se materializó en la creación de la **Red GLOBE (Global Operational**

Network of Anti-Corruption Law Enforcement Authorities) para mejorar la cooperación directa entre autoridades anticorrupción de los distintos países.

La Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2 de junio de 2021 creó finalmente la Red GlobE, que tendrá su sede en Viena (en la ONUDC) y está financiada por la propia Oficina. Actualmente forman parte de la Red, 46 países.

La Red sirve para el intercambio de conocimiento, experiencias y buenas prácticas, pero también para el intercambio de información operativa sobre investigaciones de casos concretos de corrupción entre los miembros de la misma. Por otro lado, de forma unidireccional, la Red también facilita a las autoridades anticorrupción de los países: formación, herramientas y otro tipo de asistencias técnicas.

Los estatutos permiten la participación de hasta tres instituciones u organismos por Estado Miembro. En el caso de España están representados por el momento la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude SNCA, si bien el Ministerio de Justicia ha comunicado a la Representación Permanente de España ante la ONUDC que también tiene intención de participar.

Del 15 al 17 de noviembre de 2021 se desarrolló la primera reunión de la red, que va a presidir España durante los próximos dos años.

- Se está realizando un esfuerzo importante por mejorar la **formación** en materia de investigación económica y corrupción. A título de ejemplo, se destaca que en el marco de los planes y acciones formativas y de actualización de las FCSE, a través del Instituto de Estudios Fiscales de la Hacienda Pública (IEF) se ha impartido un curso con una carga lectiva de 32 horas a distintos investigadores de la Guardia Civil en materia de corrupción, denominado **“I Jornadas sobre contratación pública y corrupción. Procedimientos e implicación penal”**.

Igualmente, el Centro Universitario de la Guardia Civil (CUGC) en colaboración con el servicio de Asuntos internos, ha establecido el **Curso de Experto Universitario en Investigación Interna** (de 24 créditos ECTS), orientado a mejorar las capacidades en investigación, especialmente en materia de criminalidad organizada y particularmente la delincuencia financiera y la corrupción.

Las FCSE forman parte y colaboran de manera activa con los organismos, agencias e instituciones de cooperación internacional. INTERPOL, EUROPOL-AP Corruption el cual está integrado dentro del Economic and Financial Crime Centre (EFECC), así como con las redes de cooperación formal e informal como la “European partners against corruption (EPAC) y la “European contact-point network against corruption (EACN)”

La Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego (BOE de 10 de julio), establece en su preámbulo que contiene modificaciones en diversas normas, principalmente en materia tributaria, con una finalidad doble. Por una parte, “para proceder a la incorporación del

Derecho de la Unión Europea al ordenamiento interno en el ámbito de las prácticas de elusión fiscal. Por otra, para introducir cambios en la regulación dirigidos a asentar unos parámetros de justicia tributaria y facilitar las actuaciones tendentes a prevenir y luchar contra el fraude reforzando el control tributario”.

En relación con la prevención del fraude fiscal y reforzamiento del control tributario, la norma recoge las siguientes medidas:

1. Adecuación del término de paraíso fiscal al de jurisdicciones no cooperativas

Con la finalidad de combatir más eficientemente el fraude fiscal, la norma amplía el concepto de paraíso fiscal y para ello determina la consideración de jurisdicción no cooperativa, atendiendo a criterios de equidad fiscal y transparencia, identificando aquellos países y territorios caracterizados por facilitar la existencia de sociedades extraterritoriales dirigidas a la atracción de beneficios sin actividad económica real o por la existencia de baja o nula tributación o bien por su opacidad y falta de transparencia, por la inexistencia con dicho país de normativa de asistencia mutua en materia de intercambio de información tributaria aplicable, por la ausencia de un efectivo intercambio de información tributaria con España o por los resultados de las evaluaciones sobre la efectividad de los intercambios de información con dichos países y territorios.

Asimismo, se considera conviene identificar aquellos regímenes fiscales preferenciales que resulten perjudiciales establecidos en determinados países o territorios que facilitan el fraude fiscal. En este sentido, una vez aprobados estos criterios, le corresponde a la persona titular del Ministerio de Hacienda adoptar las disposiciones necesarias para la publicación de la relación de países y territorios, así como regímenes fiscales perjudiciales, considerados jurisdicciones no cooperativas, relación que será actualizada periódicamente. De esta forma, los incumplimientos de los compromisos adoptados pueden desembocar en una vuelta a la lista de jurisdicciones no cooperativas. Este enfoque dinámico garantiza una respuesta firme y actualizada frente a la utilización de dichos países y territorios con fines defraudatorios.

A estos efectos, la citada Ley modifica la disposición adicional primera y la disposición transitoria segunda de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal (BOE de 30 de noviembre), y añade a dicha Ley una disposición adicional décima.

Próximamente se iniciará la tramitación de una Orden de la titular de este Ministerio por la que se determinan los países y territorios, así como los regímenes fiscales perjudiciales, que tienen la consideración de jurisdicciones no cooperativas.

2. Obligaciones informativas referidas a la tenencia y operativa con monedas virtuales.

Con la finalidad de reforzar el control tributario sobre los hechos imponible relativos a monedas virtuales, se establecen dos nuevas obligaciones informativas referidas a la tenencia y operativa con monedas virtuales. Así, se introduce una obligación de suministro de información sobre los saldos que mantienen los titulares de monedas virtuales, a cargo de quienes proporcionen servicios en nombre de otras personas o entidades para salvaguardar claves criptográficas privadas que posibilitan la tenencia y utilización de tales monedas, incluidos los proveedores de servicios de cambio de las citadas monedas si también prestan el mencionado servicio de tenencia. Igualmente, para estas mismas personas o

entidades, se establece la obligación de suministrar información acerca de las operaciones sobre monedas virtuales (adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos) en las que intervengan. Esta misma obligación se extiende a quienes realicen ofertas iniciales de nuevas monedas virtuales.

Asimismo, se introduce la obligación de informar sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero, en consonancia con la modificación de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, que ha incluido los citados activos en el ámbito objetivo de la misma.

A tal afecto, se añaden los apartados 6 y 7 a la disposición adicional decimotercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre).

Asimismo, se modifica el apartado 4 de la disposición adicional sexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre), en adelante LGT.

El establecimiento de las citadas obligaciones informativas exige un desarrollo normativo cuya tramitación se iniciará en próximas fechas.

3. Limitación de los pagos en efectivo

La Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude (BOE de 30 de octubre), determinó la limitación al uso de efectivo para determinadas operaciones económicas. Mediante la citada Ley 11/2021 norma se disminuye el límite general de pagos en efectivo de 2.500 a 1.000 euros. Asimismo, en concordancia con la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, se disminuye el límite de pago en efectivo a 10.000 euros en el supuesto de las personas físicas particulares con domicilio fiscal fuera de España.

A estos efectos se modifican el número 1 del apartado uno, los números 4 y 5 del apartado dos, el número 1 del apartado tres y se añade un número 5 al citado apartado tres, del artículo 7 de la citada Ley 7/2012.

4. Producción y tenencia de programas y sistemas informáticos que permitan la manipulación de los datos contables

Con el objetivo de no permitir la producción y tenencia de programas y sistemas informáticos que permitan la manipulación de los datos contables y de gestión, se establece la obligación de que los sistemas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables o de gestión empresarial se ajusten a ciertos requisitos que garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, requisitos cuya especificación técnica puede ser objeto de desarrollo reglamentario, incluyendo en este la posibilidad de someterlo a certificación. Asimismo, en concordancia con dicha regulación, se establece un régimen sancionador específico, derivado de la mera producción de estos sistemas o programas, o la tenencia de los mismos sin la adecuada certificación

A estos efectos se añade una nueva letra j) en el apartado 2 del artículo 29 de la LGT, que regula las obligaciones tributarias formales de los contribuyentes, y se añade un nuevo artículo 201 bis en la LGT, por el que se crea la infracción tributaria por fabricación, producción, comercialización y tenencia de sistemas informáticos que no cumplan las especificaciones exigidas por la normativa aplicable.

A este respecto, se encuentra en tramitación el *“Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación”*.

5. Conclusión:

La citada Ley 11/2021 ha introducido diversas medidas dirigidas a la prevención y lucha contra el fraude fiscal, entre las que cabe destacar las siguientes:

- Adecuación del término de paraíso fiscal al de jurisdicciones no cooperativas.
- Obligaciones informativas referidas a la tenencia y operativa con monedas virtuales.
- Limitación de los pagos en efectivo.
- Producción y tenencia de programas y sistemas informáticos que permitan la manipulación de los datos contables.

Con la excepción de la referida a los pagos en efectivo, las antedichas modificaciones van a ser objeto de desarrollo reglamentario.

17. In terms of its material scope: Could you develop on the main identified obstacles and what particular measures are being considered (or implemented) to improve efficiency in fight against complex cases of corruption?

En el Ministerio del Interior-Secretaría de Estado de Seguridad, se encuentra la **Inspección de Personal y Servicios de Seguridad**, encargada de la inspección, comprobación y evaluación del desarrollo de los servicios, centros y unidades, centrales y periféricos, de las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil, así como de las actuaciones realizadas por los miembros de las mismas en el cumplimiento de sus competencias.

Dentro de sus funciones se encuentra promover actuaciones que favorezcan la integridad profesional y deontológica de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este sentido, dispone de un Plan Nacional de Actuaciones en el marco del cual se realizan inspecciones ordinarias (generales periódicas, de seguimiento y temáticas) o incidentales derivadas de hechos concretos.

Igualmente efectúa el seguimiento y control de las quejas y sugerencias presentadas por los ciudadanos en relación a los servicios de las FCSE, velando por la integridad profesional y deontológica de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y revisando en particular los incidentes con los ciudadanos acontecidos con ocasión de actuaciones policiales, supervisando, promoviendo y controlando que dichos incidentes se atiendan, se investiguen y se resuelvan por los órganos competentes (administrativos, disciplinarios...etc.) de acuerdo a la normativa aplicable en cada caso.

Con fecha **07.02.22** se ha dictado la **Instrucción 1/2022, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se crea la Oficina Nacional de Garantía de los Derechos Humanos (ONGADH)**, con el objeto de constituirse en mecanismo de seguimiento, coordinación y evaluación que coadyuve a visibilizar e impulsar el compromiso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en el respeto a los Derechos Humanos (DD. HH.).

La ONGADH queda integrada en la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad (IPSS), asumiendo y materializando un nuevo impulso a los cometidos de la misma relacionados con los DD.HH., en concreto “*promover actuaciones que favorezcan la integridad profesional y deontológica de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado*”, y “*velar para que las FCSE cumplan las normas nacionales e internacionales contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes*”.

Con tal finalidad, las funciones de la ONGADH son:

1. Comprobar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en instrucciones u otras disposiciones sobre actuaciones policiales que puedan afectar al ejercicio de los derechos fundamentales.
2. Realizar el seguimiento, control y análisis de los sucesos en los que pueda resultar la muerte, suicidio, tentativa de suicidio o lesión de personas durante las actuaciones del personal de las FCSE.
3. Efectuar el seguimiento, control, evaluación y explotación de los datos registrados en la Aplicación Informática del Plan Nacional de Derechos Humanos, donde debe grabarse toda denuncia sobre hechos y actuaciones que puedan poner de manifiesto una supuesta vulneración de los derechos fundamentales de las personas con ocasión de una actuación policial de las FCSE.
4. Garantizar el tratamiento adecuado de aquellos hechos conocidos a través del programa de quejas y sugerencias regulado en el Real Decreto 951/2005, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, que excedan de una simple manifestación de insatisfacción de los usuarios y puedan suponer una afectación de los derechos fundamentales.

5. Atender las solicitudes de información que en materia de DD. HH. le dirijan los organismos e instituciones nacionales competentes, así como cooperar con la DGRIE en la respuesta institucional del Ministerio ante peticiones de organismos internacionales.
6. Promover acciones formativas de la SES en relación con los DD. HH., dirigidas a los miembros de las FCSE.
7. Divulgar entre las FCSE guías de buenas prácticas para la protección y garantía de los DD. HH.
8. Actuar como punto de contacto nacional, en el ámbito de la SES, sobre las actuaciones de las FCSE en materia de DD. HH.
9. Promover la confianza ciudadana en sus FCSE a través de la transparencia de sus actuaciones.

Junto a la actuación de dicha oficina, la aplicación de comportamientos éticos dentro de las FCSE, se basa en la normativa de regulación de personal general de la administración y específica de los mismos, y particularmente en sus respectivos códigos éticos de referencia a nivel internacional y nacional, en particular:

- Código ético del Cuerpo Nacional de Policía del año 2013 (sin rango normativo).
- Real Decreto 176/2022, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Código de Conducta del personal de la Guardia Civil, y que actualiza la normativa anterior.
- de muy reciente aprobación.

Y su aplicación se asegura mediante la concienciación y formación, el ejercicio de la labor de mando, la supervisión y en último extremo a través de la respectiva normativa disciplinaria que prevé y sanciona las conductas contrarias a los derechos humanos en el seno de las citadas corporaciones.

18. In your written contribution you mention new legislative measures adopted under the Law 11/2021 of 9 July 1995 on measures to prevent and combat tax fraud and to strengthen the capacities of State bodies to prevent and suppress such behavior. What is the state of play of the implementation of such law/legislative developments, and what state bodies are covered under the law? How is corruption featured in this legislation? Could you develop on the particular measures envisaged to strengthen prevention of fraud and corruption?
19. In your written contribution, you mention the creation of a National Office for Human Rights Guarantees (ONGADH) to ensure transparent action in the area of the State Security Forces and Corps. Could you please provide an update on the state of play of the establishment and initial operations of this office? What are its envisaged capacities as regards enforcement of ethical behaviors within the police?

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), Policía Nacional y Guardia Civil, ya disponen de un marco de referencia regulador de incompatibilidades, que parte esencialmente

de lo establecido en sus respectivas **normas de régimen de personal** y en otra normativa de aplicación específica o supletoria, como es:

- ✓ Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes (desarrollo de la anterior), para la Policía Nacional.
- ✓ Real Decreto 517/1986, de 21 de febrero, de incompatibilidades del personal militar, para la Guardia civil

La transgresión de las normas de incompatibilidades, está prevista y sancionada como falta muy grave en las respectivas normas de régimen disciplinario.

No obstante lo anterior:

- Se está trabajando en un proyecto de **Real Decreto por el que se desarrolla el régimen de incompatibilidades en la Policía Nacional**.

En él se pretende regular de manera específica el régimen de incompatibilidades del personal funcionario de la Policía Nacional, a partir del marco jurídico que establece la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, en cuyo artículo 15 se dispone que, reglamentariamente, se dictarán las normas de desarrollo y aplicación de la normativa general de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, para adaptarla a la estructura y funciones específicas de la Policía Nacional; y se fijan los principios y límites generales que lo informan, determinando que en ningún caso se podrá autorizar la compatibilidad para desempeñar un segundo puesto de trabajo, cargo, profesión o actividad, pública o privada, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia, ser incompatible por razón del nivel del puesto de trabajo que se ocupe, suponer un deterioro para la imagen y el prestigio de la Policía Nacional o ser contrario a sus principios básicos de actuación.

En el referido proyecto se pretende establecer un sistema acorde con las peculiaridades de la función policial que, conforme a los principios y límites generales mencionados en el párrafo anterior, permite desempeñar un segundo puesto de trabajo teniendo siempre como referencia la prestación del servicio policial, limitándose aquellas situaciones potenciales que puedan poner en riesgo la imparcialidad e independencia del personal de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones. En este sentido se considera incompatible con el ejercicio de la función policial el desempeño de cargo orgánico en partidos políticos, el ejercicio de la profesión de procurador y la dedicación a la abogacía en determinados ámbitos.

El documento borrador se encuentra en fase de elaboración y discusión a nivel de la corporación policial.

- Asimismo, se ha confeccionado el proyecto de **Real Decreto sobre el régimen de incompatibilidades del personal de la Guardia Civil** que tiene por objeto dotar (actualizar) a la Guardia Civil de una normativa específica en la materia de incompatibilidades mediante el desarrollo reglamentario en relación a lo recogido en el Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil y en artículo 22 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil y en la Ley .

La prohibición de la compatibilidad del ejercicio simultáneo de un empleo público con otro empleo público o empleo, actividad o profesión privada se justifica por razones de ética, real o potencial colisión de intereses públicos y privados, y también de productividad, pues no se concibe que pueda ser óptima en dos empleos o profesiones. Estos fundamentos deontológicos se conectarían con el principio de dedicación al servicio público, absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos; y con el principio de eficacia administrativa, en el sentido de que un funcionario público tiene que vigilar la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización pública.

Se ha iniciado ya su tramitación legislativa, a nivel Ministerial, es la que se está pendiente de recibir la conformidad del Ministerio de Defensa (coproponente), la aprobación previa del Ministerio de Hacienda, y Función Pública, y el dictamen del Consejo de Estado. Previsto de manera tentativa para aprobación en el año 2023.

20. Could you please provide further information on the state of play of the draft law on incompatibilities and conflicts of interest for staff, as well as the timeline for its implementation? Could you clarify what new measures in the field of prevention of conflicts of interests are being considered?

El Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las actividades de los grupos de interés, además de prever la creación de un registro, público y obligatorio de grupos de interés, gestionado por la Oficina de Conflictos de Intereses, contempla el establecimiento de límites a las puertas giratorias entre altos cargos y empleados públicos, por un lado, y dichos grupos, por otro. Asimismo, prevé el establecimiento de un código de conducta aplicable a todos ellos, e incluye la regulación de un régimen sancionador para altos cargos y empleados públicos ante los eventuales incumplimientos de la norma.

Por otra parte, el Anteproyecto de Ley de Prevención de conflictos de intereses del personal al servicio del sector público, contempla, como novedad, el establecimiento de determinadas limitaciones al cese dirigidas a los empleados públicos que, conforme a la legislación vigente, y a diferencia de lo que ocurre con los altos cargos, no están sujetos a ellas.

Se está trabajando en ambos Anteproyectos de Ley para iniciar su tramitación lo antes posible y de cuyo desarrollo se dará oportunamente cuenta a la Comisión.

21. Could you provide further information on the state of play of the draft Royal Decree implementing a system of incompatibilities for the National Police and Civil Guard? Could you provide clarification on the personal scope of application of this decree?
22. Could you provide an update on the state of play of the draft regulation on lobbying and the implementation of the transparency register? Are you considering including a system of penalties and revolving door limitations for senior officials and public employees?
23. Could you please provide an update on any other new or envisaged legislative developments as regards corruption related offences in the Spanish criminal legal framework?

El 4 de marzo de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción con el objeto de transponer la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Asimismo, fue acordada la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.a) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del procedimiento de elaboración y aprobación del citado anteproyecto de ley.

Este anteproyecto de ley se refiere a los delitos e infracciones administrativas que atenten, no sólo contra los intereses financieros de la Unión Europea, sino contra el interés general de nuestro país. Por lo tanto, además de su utilidad para combatir la corrupción, se configura como una herramienta para combatir cualquier quebranto económico contra la hacienda pública, o cuestiones claves en nuestro sistema económico como la libre competencia o la seguridad y salud en el trabajo.

El anteproyecto de ley regula, entre otras cuestiones, un régimen jurídico específico que garantiza la protección efectiva de aquellas personas que, tanto en el seno de organizaciones públicas como privadas, comuniquen información relativa a posibles infracciones del Derecho de la Unión y del Derecho nacional.

En este sentido, regula los sistemas internos de información, que se perfilan como cauce preferente para la comunicación de posibles infracciones, siempre dentro del respeto a la legislación específica que pueda existir en una concreta materia o en distintos sectores como son el financiero, de seguros, de auditoría, de competencia o de mercados de valores.

En el sector privado, estarán obligadas a configurar un sistema interno de información todas las empresas que tengan más de cincuenta trabajadores. No obstante, siendo conscientes del coste que pueda generar el establecimiento de este sistema, las

empresas que, superando la cifra de cincuenta, cuenten con menos de doscientos cincuenta trabajadores, pueden compartir medios y recursos para la gestión de las informaciones que reciban, si bien quedando siempre clara la existencia de canales propios en cada empresa. En los grupos de empresas será la sociedad dominante la que decida la organización de los canales de comunicación.

Estarán también obligados a contar con un sistema interno de información los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, así como las fundaciones que dependan de estos, siempre que gestionen fondos públicos.

La obligación de contar con un sistema interno de información también se aplicará al sector público. En este sentido, además de todas las Administraciones Públicas, quedan vinculadas a dicha obligación las administraciones públicas que gestionan los servicios de la Seguridad Social, las universidades, las sociedades y fundaciones que integran el sector público, las corporaciones públicas y todos los órganos constitucionales, entre otros.

El anteproyecto de ley estuvo sometido al trámite de audiencia e información pública durante los días 8 a 17 de marzo de 2022.

Media

24. In your view, what have been the most important developments in Spain since last report in the as regards Media Freedom and Pluralism?

Respecto a pluralismo y libertad de los Medios de Comunicación, en lo que respecta al ámbito de los servicios de comunicación audiovisual se debe destacar la aprobación del *Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual* por parte del Consejo de Ministros el 30 de noviembre de 2021, y el posterior inicio de la tramitación parlamentaria de dicho proyecto de Ley.

En el proyecto normativo se establecen una serie de normas para mantener el pluralismo externo en el mercado de la prestación de servicios de comunicación audiovisual a través de ondas hertzianas terrestres, ya sean servicios televisivos o radiofónicos, pues el número de licencias está limitado por emplear un recurso escaso como es el espectro radioeléctrico. Estas reglas son herederas de las establecidas en la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual.

En el caso de servicios de comunicación audiovisual televisivos de ámbito estatal, son tres las principales reglas:

- En primer lugar, para evitar restricciones al pluralismo se establece que no se podrán adquirir participaciones significativas en más de un prestador de ámbito estatal cuando la audiencia media del conjunto de los servicios de ese prestador supere el veintisiete por ciento de la audiencia total durante los doce meses consecutivos anteriores a la adquisición.
- Asimismo, en el APL se establece que ninguna persona física o jurídica podrá adquirir una participación significativa o derechos de voto en más de un prestador del servicio de comunicación audiovisual televisivo, cuando los prestadores del SCA televisivo de ámbito

estatal acumulen derechos de uso sobre el dominio público radioeléctrico superiores, en su conjunto, a la capacidad técnica correspondiente a dos canales múltiplex.

- Por último, se impone que ninguna persona física o jurídica titular o partícipe en el capital social de un prestador del servicio de comunicación audiovisual televisivo de ámbito estatal podrá adquirir una participación significativa o derechos de voto en el capital de otro prestador del mismo servicio, cuando ello suponga impedir existencia de, al menos, tres prestadores privados distintos del servicio de comunicación audiovisual televisivo en el ámbito estatal, asegurándose el respeto al pluralismo informativo.

Más allá de los servicios de comunicación audiovisual televisivos que utilizan ondas hertzianas, es importante señalar que existe un creciente mercado de servicios que utilizan otras tecnologías. Este mercado se encuentra liberalizado desde la Ley 7/2010 (y lo seguirá estando con la futura Ley General de Comunicación Audiovisual), ya que los prestadores están sometidos exclusivamente al requisito de realizar una comunicación previa. Este segmento creciente de servicios de comunicación audiovisual sin duda contribuye a reforzar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación.

25. Do you have any remarks regarding the specific issues noted in the Commission's 2021 Rule of Law Report?

Ningún comentario.

26. In the light of the revision of the audiovisual media services directive (AVMSD), the new tasks added to the Regulatory Authority (as indicated in your written contribution), the criteria specified in article 30 of AVMSD and the observations made in the 2021 Rule of Law Report, are there any updates or recent or planned developments as regards the level of resources at the disposal of the Regulatory Authority and its functional independence? In your written contribution, you explain that the draft law on audio-visual communication will provide for some changes aimed at increasing the transparency of media ownership. Could you please clarify to what extent those changes will affect digital media?

La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es el organismo que mejor puede contestar a la primera pregunta. No obstante, los datos que se desprenden de la Oferta de Empleo Público (uno de los principales instrumentos de provisión de las necesidades de personal en la Administración General del Estado y Entes Públicos) parecen indicar una evolución positiva en la incorporación de personal, pasando de prever 4 nuevos empleados públicos en 2020¹ a 16 nuevos empleados públicos en 2021².

¹ https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13116

² https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-12608

En relación a la segunda cuestión, el Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual mejorará la transparencia de los servicios de comunicación audiovisual que ofrezcan contenido audiovisual a través de internet, ya sean estos servicios de comunicación audiovisual o servicios de intercambio de videos a través de plataforma (quedan descartados periódicos digitales y similares). Las obligaciones de transparencia se pueden sintetizar como sigue:

1) Si nos referimos a un servicio de comunicación audiovisual lineal o a petición, conforme al Proyecto de Ley, el prestador estará sujeto a:

- Obrar inscrito en un Registro de Prestadores de Servicios de Comunicación audiovisual en atención al ámbito geográfico. Asimismo, en dicho Registro deberán constar los partícipes significativos en el capital del prestador (>3% capital). El Registro Estatal de Prestadores será digital y públicamente accesible.
- Se fomentará la transparencia, obligando al prestador a publicar en su página web los siguientes datos:
 - a) Denominación y domicilio social, datos de contacto, incluido correo electrónico, así como si tiene ánimo de lucro o no o si está participada por un Estado.
 - b) Establecimiento en España y autoridad audiovisual de supervisión competente.
 - c) Personas físicas o jurídicas titulares en última instancia de la responsabilidad editorial o autores del contenido editorial.
 - d) Personas físicas o jurídicas propietarias o titulares de participaciones significativas.

2) Si se trata de un servicio de intercambio de videos a través de plataforma (también les aplica la Ley 34/2002 Servicios Sociedad de Información), o una Red Social que cumpla los requisitos para ser considerada un servicio de intercambio de vídeo a través de plataforma:

- Obrar inscrito en un Registro de Prestadores
- Mantener accesible la siguiente información por medios electrónicos de forma permanente, fácil, directa y gratuita:
 - Su nombre o denominación social; su residencia o domicilio o, en su defecto, la dirección de uno de sus establecimientos permanentes en España; su dirección de correo electrónico y cualquier otro dato que permita establecer con él una comunicación directa y efectiva.
 - Los datos de su inscripción en el Registro Mercantil en el que, en su caso, se encuentren inscritos o de aquel otro registro público en el que lo estuvieran para la adquisición de personalidad jurídica o a los solos efectos de publicidad.
 - En el caso de que su actividad estuviese sujeta a un régimen de autorización administrativa previa, los datos relativos a dicha autorización y los identificativos del órgano competente encargado de su supervisión.
 - El número de identificación fiscal que le corresponda.

o facilitar información clara y exacta sobre tarifas en el caso de que fuesen aplicables. Los códigos de conducta a los que, en su caso, esté adherido y la manera de consultarlos electrónicamente.

27. The written contribution explains there are three regional regulators in addition to CNMC. Could you please provide us with further clarification as to the implementation of the AVMS Directive, notably in the regions where no regional regulator established? In such cases which instance(s) takes up the regulatory role?

La transposición en el ordenamiento jurídico nacional de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual se realizará mediante el Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, estableciendo la normativa básica conforme al artículo 149.1.27 de la Constitución Española, que establece que le corresponde al Estado la siguiente competencia exclusiva: *Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.*

En base a dicho artículo de la Constitución, las Comunidades Autónomas ostentan la competencia de desarrollo normativo y ejecución de conformidad con sus Estatutos de Autonomía y para aquellos servicios que se presten en su territorio.

Por otra parte, como ya se ha comentado, cada Comunidad Autónoma tiene un regulador audiovisual, que en base a su autonomía organizativa puede recaer en una autoridad independiente, como es el caso de los tres ejemplos citados en la contestación previa o en uno de los departamentos del propio Gobierno de la Comunidad Autónoma. Por tanto, es la normativa de cada una de las CCAA la que en virtud de sus competencias establece la forma de la autoridad audiovisual.

28. The draft law on audio-visual communications will update the provisions concerning CNMC in the light of the updated AVMSD. Will it also contain provisions to update audiovisual legislation in the regions, in particular the role of regulators in view of article 30 of AVMSD?

Como se ha indicado en la respuesta precedente, son las CCAA las que en virtud de sus competencias regulan las autoridades audiovisuales en su ámbito territorial. El Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, como normativa básica en la materia, prevé la asunción por parte de las autoridades audiovisuales de las CCAA de competencias de supervisión y control de los servicios de comunicación audiovisual de ámbito autonómico.

Por otro lado, como novedad, se prevé en la Disposición adicional segunda del Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual la creación de un Grupo de Autoridades de Supervisión para los Servicios de Comunicación Audiovisual. Dicho grupo estará integrado por representantes de las autoridades independientes de ámbito estatal y autonómico en el ámbito de los servicios de

comunicación audiovisual que tengan la responsabilidad primaria de la supervisión de los servicios de comunicación audiovisual o, en los casos en que no exista una autoridad u organismo, por otros representantes elegidos a través de sus propios procedimientos.

Los cometidos del Grupo de Autoridades de Supervisión para los Servicios de Comunicación Audiovisual serán los siguientes:

- a) Intercambiar experiencias y mejores prácticas sobre la aplicación del marco regulador de los servicios de comunicación audiovisual en sus ámbitos de competencia, en particular en lo que respecta a la accesibilidad, la alfabetización mediática, la protección de los menores y el cumplimiento por parte de los servicios públicos de comunicación audiovisual de su misión de servicio público.
- b) Cooperar e intercambiar información.

En el BOE núm. 19, de 22 de enero de 2021 se publicó la Resolución de 15 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión, para la identificación de profesionales de la información durante los hechos que requieran actuaciones policiales.

Dicho Convenio es la actualización de otro anterior del año **2011**, que venía operando con eficacia y normalidad hasta ahora, y tiene por objeto mejorar la colaboración entre los actores citados con la finalidad principal de facilitar la labor de profesionales de la información que pertenezcan a dichas organizaciones y que desarrollen su actividad en lugares y actos en los que se producen situaciones de riesgo o de conflicto.

Del contenido del mismo, se destacan entre otras cosas lo siguiente:

- El MIR, la FAPE y la ANIGP-TV consideran que los derechos a información y a la libertad de expresión representan pilares fundamentales y básicos, para que los ciudadanos puedan desarrollar plenamente el ejercicio de sus libertades en una sociedad democrática. En este ámbito, los medios de comunicación y sus profesionales de la información se constituyen en instrumentos y pilares esenciales para el pleno desarrollo de las libertades públicas. El derecho de la ciudadanía a recibir información completa y veraz requiere que los profesionales de la información sean testigos directos de hechos que, en ocasiones, reportan especial riesgo para su seguridad física; lo que exige una actuación coordinada con las FCSE, que garantice el ejercicio de sus funciones informativas.
- Se desarrolla mediante el establecimiento de unos distintivos de identificación para los periodistas y la obligación para que las FCSE adopten cuantas medidas sean necesarias, para que quien porte los distintivos descritos pueda realizar su labor informativa con la mayor eficacia posible.

Incluye que el responsable del dispositivo policial en el lugar de los hechos pueda ser requerido por quien se encuentre acreditado con estos distintivos, para que le informe sobre las zonas que coyunturalmente se consideren operativamente más seguras para compatibilizar la realización preferente de su tarea con la labor de los efectivos policiales

Dicho Convenio prevé la constitución de una comisión de seguimiento, encargada de velar por el exacto cumplimiento de lo establecido en el referido convenio, proponer las actuaciones y medidas a adoptar para el cumplimiento de sus objetivos y resolver los problemas de interpretación e incidencias que puedan plantearse en el mismo. Dicha Comisión se deberá reunir cuantas veces sea preciso y, al menos, una vez al año, debiendo ser convocada por la Presidencia a petición de cualquiera de sus miembros, previa indicación de los asuntos a tratar.

Con fecha 5 de marzo de 2021, tuvo lugar la sesión constitutiva de la Comisión de seguimiento, tras la cual se otorgó la presidencia de la Comisión al Área de Seguridad Ciudadana y Operaciones de la Secretaría de Estado de Seguridad. Hasta el momento no se ha reunido nuevamente de forma ordinaria y no ha sido requerida su convocatoria por petición de sus miembros.

Desde la presidencia de la Comisión se mantiene contacto frecuente con sus miembros, quienes han manifestado que la actividad relacionada en el objeto del convenio: “mejorar la colaboración entre el MIR, la FAPE y la ANIGP-TV, con la finalidad principal de facilitar la labor de profesionales de la información que pertenezcan a dichas organizaciones y que desarrollen su actividad en lugares y actos en los que se producen situaciones de riesgo o de conflicto”, se está desarrollando con absoluta normalidad.

El convenio se puede consultar en la dirección https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-962.

29. Could you please provide an update on the status of the draft law on classified information?

En la anterior contribución que se remitió para la elaboración del Informe anual de la Comisión sobre el Estado de Derecho 2022 se informó de que se había constituido un Grupo de Trabajo durante los primeros meses del año 2021 a efectos de elaborar un borrador de Anteproyecto de Ley de Información Clasificada. El Grupo de Trabajo ha estado liderado por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática e integrado, además, por los Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Justicia, Defensa e Interior. Cabe destacar que el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada está incluido en el Plan Anual Normativo 2022 (aprobado por el Consejo de Ministros el 11 de enero de 2022).

A lo largo del año 2021 se celebraron distintas reuniones a nivel multilateral y bilateral para avanzar en la elaboración del texto que permitieron concluir el borrador de Anteproyecto de Ley de Información Clasificada.

Se han tenido en cuenta las obligaciones de la OTAN, de la UE y de los Tratados internacionales en materia de información clasificada. Además, se incorpora un régimen jurídico sobre esta materia homologable al de otros países de referencia en la materia (Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Dinamarca, entre otros). Con la aprobación de dicha norma con rango de ley, España se alinea con un sistema común de información clasificada.

No es un texto que cambie radicalmente el sistema de información clasificada, sino que sistematiza la regulación ahora dispersa y colma ciertas lagunas. Entre sus contenidos, cabe destacar:

- Se establecen una serie de procedimientos jurídicos que regulan los procesos de clasificación, desclasificación y reclasificación de la información cuya revelación no autorizada o utilización indebida pueda ocasionar un daño o poner en peligro de la seguridad o defensa nacional.
- Se prevé, por primera vez en España, un sistema de límites temporales al carácter confidencial de la información. En adelante, ninguna información quedará sustraída al conocimiento público *sine die*. Los plazos de desclasificación varían en función del nivel de protección de los asuntos.
- Se establecen los siguientes tipos de clasificación: “Alto Secreto”, “Secreto”, “Confidencial” y “Restringido”. La clasificación se realiza atendiendo al alcance del perjuicio que puede producir la difusión de la información desde el punto de vista de la seguridad o defensa nacional.
- Se regulan las competencias y responsabilidades de la Autoridad Nacional para la protección de la información clasificada.
- Se desarrolla el régimen jurídico de la información clasificada.
- Se recoge un esquema de infracciones y sanciones administrativas destinadas a garantizar el cumplimiento de la Ley.

El borrador del Anteproyecto, de concretarse en Ley, vendría a derogar la Ley de 9/1968, de 5 de abril sobre Secretos Oficiales y el Decreto 272/1969, de 20 de febrero, por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley 9/1968, de 5 de abril de Secretos Oficiales.

30. Could you please provide an update on developments or new measures aimed to protect journalists? In particular, could you please inform us about the implementation of the Agreement signed between the Ministry of Home Affairs, the FAPE and the ANIGP-TV?

31. In your written contribution, you provide details on the appointment of the Board of RTVE. Could you please provide further details on how the political independence and financial viability of the Board is guaranteed?

Las garantías de independencia política del Consejo de Administración de RTVE vienen dadas, en primer lugar, por el mecanismo de nombramiento de los consejeros y, en segundo lugar, por el estatuto que rige la actividad de esos miembros.

Los miembros del Consejo de Administración son elegidos por las Cortes Generales, a razón de seis por el Congreso de los Diputados y cuatro por el Senado por mayoría de dos tercios. Se deberá respetar el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en su composición, tal y como establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

El proceso de selección de los miembros del Consejo de Administración y del Presidente de la Corporación RTVE y del Consejo se desarrolla mediante concurso público regulado en la disposición transitoria segunda de la Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal.

Por su parte, el Estatuto de los miembros del consejo establece lo siguiente en relación a su actividad:

- Los miembros del Consejo de Administración estarán sujetos al régimen de incompatibilidades establecido en la legislación mercantil para los administradores, siendo en todo caso incompatibles con el mandato parlamentario. El Presidente de la Corporación RTVE, además, tendrá dedicación exclusiva y estará sujeto al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado.
- Los miembros del Consejo de Administración no podrán tener intereses directos o indirectos en las empresas audiovisuales, discográficas, de cine, de video, de prensa, de publicidad, de informática, de telecomunicaciones, de servicios de la sociedad de la información o cualquier otro tipo de entidades relacionadas con el suministro, dotación de material o programas a la Corporación RTVE y sus filiales. En todo caso los deberes de lealtad establecidos en la legislación de sociedades mercantiles para los administradores se extenderán respecto a las anteriores empresas.
- Los miembros del Consejo de Administración tendrán la condición de cuentadantes a los efectos previstos en la legislación del Tribunal de Cuentas.
- Los miembros del Consejo de Administración ejercerán su cargo con sujeción a los deberes de diligente administración, fidelidad, lealtad, secreto y responsabilidad establecidos en la legislación mercantil. Asimismo, ajustarán su actuación a los principios de legalidad, objetividad y buen gobierno.
- En el ejercicio de sus funciones los consejeros actuarán con absoluta independencia, sin que puedan recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación imperativa del Gobierno ni de la Administración General del Estado u otras instituciones o entidades.

El funcionamiento del Consejo de Administración se regula en el Reglamento del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, su última modificación data del 23 de noviembre de 2016. En él se regulan aspectos concretos de su funcionamiento, caso de sustitución del Presidente por enfermedad, pero solamente dentro del ámbito del Consejo de Administración y no en sus funciones ejecutivas en la Corporación RTVE, y se establecen las Comisiones de funcionamiento de dicho órgano; caso del Comité de Auditoría.

Debido al modelo de elección y al proceso de selección del Consejo de Administración actual de la Corporación RTVE, el mayor exponente de su independencia política se halla en sus votaciones; algunas de las cuestiones sometidas a su consideración son aprobadas por unanimidad, otras en cambio por mayorías cambiantes en el seno del Consejo; que no siempre se corresponden, como acreditan los medios de comunicación en sus informaciones, ni con la mayoría parlamentaria, ni con el Gobierno de España.

Por último, en cuanto a la viabilidad financiera, el Presidente del Consejo de Administración percibirá las retribuciones fijadas de acuerdo con el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades. El resto de los miembros del Consejo de Administración percibirán exclusivamente las indemnizaciones por asistencia a sus sesiones, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

32. (it could be answered in written form) Could you please provide a list of all public media service providers in Spain?

Como complemento a la respuesta dada desde otro Ministerio, se adjunta lista de prestadores de Servicios de comunicación audiovisual públicos de ámbito estatal y autonómico.

Prestador SCA público	Ámbito
Corporación de Radio y Televisión Española, S.A.	Estatal
Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG)	Galicia
Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA)	Principado de Asturias
Euskal Irrati Telebista (EITB)	País Vasco
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión	Aragón
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)	Cataluña
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC)	Comunitat Valenciana
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB)	Baleares
Ente Público de Radiotelevisión de Castilla–La Mancha (CMM).	Castilla la Mancha
Radio Televisión Madrid	Madrid
Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión de Andalucía	Andalucía
Radiotelevisión de la Región de Murcia	Región de Murcia
Ente Público Radiotelevisión Canaria	Canarias
-	Cantabria

Radio Televisión de Castilla y León S.A (100% privada)	Castilla Leon
-	La rioja
Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA)	Extremadura
-	Navarra

Los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito local son muy numerosos y obran inscritos en los Registros de las correspondientes Comunidades Autónomas.

33. Could you please provide us with an update on the impact of the COVID-19 pandemic on media sector since July 2021, as well as any measures adopted by the authorities in said period to support the media sector?

La pandemia de la COVID-19 produjo, por un lado, un descenso acusado de los ingresos de los medios de comunicación, como se puede ver a continuación, y por otro, un incremento de las necesidades informativas.

Tanto la Plataforma de participación ciudadana como los laboratorios de innovación para la participación son iniciativas incluidas en el mismo Plan de Mejora de la Participación Ciudadana en las políticas públicas, que es el Compromiso 2 del IV Plan de Gobierno Abierto. Ambas iniciativas responden, por tanto, a las demandas expresadas por la ciudadanía en el proceso de consulta previa que se desarrolló en 2019 para el diseño del IV Plan y a las prioridades acordadas con las organizaciones de la sociedad civil en los talleres de cocreación que se desarrollaron en junio y septiembre de 2020.

La creación y puesta en funcionamiento de la Comunidad de práctica de participación hay que enmarcarla en la iniciativa de mejora del Foro de Gobierno abierto que también forma parte de ese Plan de mejora de la participación y que, entre otros avances, nos permite enfocar de una forma flexible los trabajos del Foro que, actualmente, puede acordar la creación de subgrupos de trabajo, comunidades de práctica, talleres etc.

De hecho, el pasado 10 de marzo en la reunión del Pleno del Foro se ha acordado ratificar la creación tanto de la Comunidad de práctica, dependiente del Grupo de Trabajo de Participación ciudadana del Foro como la constitución de un subgrupo de trabajo, de composición paritaria Administraciones/sociedad civil para la reforma de la vigente ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, aprobada en 2013, que forma parte del compromiso 1 del IV Plan de Gobierno Abierto.

Por tanto las tres iniciativas, Plataforma, Laboratorios y Comunidad responden a un mismo objetivo que es el de mejorar la participación ciudadana en los asuntos públicos. La plataforma canalizará la participación directa de las personas físicas y jurídicas en el proceso de elaboración normativa y en planes y programas, los laboratorios canalizarán la participación de los actores, públicos, privados y sociales en el diseño de las políticas públicas, mientras que la Comunidad de práctica canalizará y gestionará el conocimiento de los expertos en materia de participación ciudadana para el diseño tanto de la plataforma como de los laboratorios.

En concreto:

Plataforma de Participación ciudadana.

La iniciativa de creación Plataforma se traduce, en la práctica, en una mejora en el acceso a través del Portal de la Transparencia a los procesos participativos que convoque la Administración, abiertos al conjunto de la ciudadanía, en un triple ámbito:

- Elaboración de normas: consulta previa a la elaboración y audiencia posterior del texto propuesto, trámites que son preceptivos de acuerdo con el ordenamiento español.
- Diseño, implementación y evaluación de planes y programas públicos
- Otras consultas directas a la ciudadanía.
- Propuestas ciudadanas

La idea es que cualquier persona física o jurídica pueda estar informada a través de la Plataforma de los procesos participativos convocados por la Administración General del Estado y pueda también, participar activamente en dichos procesos si lo desea, aportando sus ideas, propuestas o comentarios.

Por ello, la Plataforma está también vinculada a otras iniciativas y compromisos recogidos en el IV Plan, como, por ejemplo, al compromiso 4, : establecimiento de la huella normativa, mientras que en el ámbito de los planes y programas y otro tipo de consultas la Plataforma está vinculada a la mejora de la participación ciudadana en planes y programas públicos. .

Todas estas iniciativas también se encuentran vinculadas al Compromiso 8 de Comunicación Inclusiva del Gobierno Abierto, orientado a que cualquier persona, y especialmente quienes se las más vulnerables o que se encuentran en riesgo de exclusión social, conozcan el Portal de la Transparencia y las herramientas disponibles en este Portal tanto para ejercer su derecho de acceso a la información pública como a participar en los asuntos públicos.

Laboratorios de innovación para la participación ciudadana

Los laboratorios operan en cambio, como he señalado, en el escenario de los actores clave, involucrados en cada una de las políticas públicas y que, por tanto, tienen algo que decir en su diseño, tales como las propias Administraciones Públicas, organizaciones empresariales o sindicales, asociaciones y fundaciones del ámbito correspondiente, colectivos ciudadanos etc.

HazLab, que es el nombre elegido para el prototipo de Laborarorio, es un espacio 100% digital que permitirá a todos los actores, previamente identificados, compartir, explorar y experimentar soluciones innovadoras para dar respuesta a problemas sociales, identificar y dar satisfacción a necesidades ciudadanas y, por tanto, colaborar con la Administración en el diseño de las políticas públicas, facilitando el acceso de todos los actores en un único punto de encuentro digital, lo que también contribuirá a reducir tiempos y costes de desplazamientos, y a que todos y cada uno de los actores involucrados conozca los enfoques, ideas y soluciones propuestas por el resto de actores implicados. Lógicamente también en este ámbito de los laboratorios podrá generarse documentación que, posteriormente, pueda ser puesta a disposición de la ciudadanía en los procesos consultivos que se convoquen a través de la Plataforma de participación alojada en el Portal de Transparencia y, en sentido contrario, también podrán valorarse en el Laboratorio las aportaciones que realicen personas en los procesos participativos que se convoquen a través de la Plataforma.

HazLab ofrece las siguientes funcionalidades:

1. Es un **Espacio para la Identificación** de los principales actores, públicos, sociales y privados, involucrados en el diseño de cada política pública.
2. Es un **Punto de Acceso, encuentro** y debate entre todos los actores identificados para cada política pública, ya que permite la celebración de conferencias, reuniones, talleres, mesas redondas etc.
3. Es un **Espacio virtual de Trabajo Colaborativo**, en el que será posible compartir información, documentación, propuestas, ideas etc.
4. Funciona como **Incubadora de iniciativas** para el desarrollo soluciones innovadoras a los problemas y necesidades ciudadanas, mediante el diseño de prototipos.
5. Se configura como **Centro de experimentación** de las propuestas o prototipos diseñados, mediante la realización de experiencias piloto y la evaluación o testeo de las mismas.
6. Actúa como **Acelerador de proyectos** para el diseño de procesos participativos en el diseño de las políticas públicas, a través del desarrollo de metodologías, guías, repositorios documentales o herramientas tecnológicas.

Para hacer posibles estas seis funcionalidades, se ha diseñado ya una herramienta digital, basada en soluciones web que permite proveer a los actores participantes de espacios comunes de trabajo, redes y foros, repositorios documentales, pizarras virtuales y salas de videoconferencia y para seminarios web. Para testar la eficacia del nuevo espacio virtual hazlab, que actualmente se encuentra en fase de experimentación, se ha decidido que esta herramienta digital dé soporte a los trabajos que está desarrollando, de un lado, la Comunidad de Práctica “Participa IV Plan” y de otro, el Subgrupo de Trabajo recientemente creado para la reforma de la vigente ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.

El laboratorio Haz Lab, una vez puesto en marcha, se pondrá a disposición de todas las Administraciones Públicas, que podrán usarlo para el diseño de las políticas públicas.

En el momento actual se encuentra en fase de experimentación el espacio virtual del laboratorio, que se puede visitar en www.hazlab.es.

Un ejemplo para ilustrar la interacción y complementariedad de la Plataforma y del laboratorio es el proceso participativo y colaborativo que se está desarrollando en relación con la reforma de la ley de transparencia. Por una parte, está previsto en el IV Plan la convocatoria de una consulta previa abierta a la ciudadanía, antes de que se proceda a la elaboración de un borrador, así como posteriormente un trámite de información pública del mismo; por otro, el subgrupo del Foro para la reforma, constituido recientemente y también previsto en el IV Plan, está desarrollando sus trabajos, a través de HAZLAB.

Comunidad de práctica “Participa IV Plan”

Por último, la Comunidad de Práctica persigue el objetivo de generar conocimiento útil para mejorar la participación ciudadana y el cumplimiento de las iniciativas sobre participación incluidas en el IV Plan,

mediante el intercambio entre los profesionales y expertos en esta materia de información, experiencias y herramientas que ya están implantadas o que se están desarrollando por las diferentes organizaciones, públicas o sociales para promover la participación en sus respectivos ámbitos.

Teniendo en cuenta que la Comunidad está integrada por un grupo muy numeroso de personas expertas, actualmente casi 80 personas, y que, en el futuro podrían incorporarse otras más, la Comunidad se ha estructurado en tres subcomunidades: Plataformas, Procesos y Laboratorios.

En el ámbito de las Plataformas y de los laboratorios, las aportaciones generadas en las correspondientes subcomunidades permitirán mejorar el diseño inicial tanto del prototipo de la Plataforma de Participación del Portal de la Transparencia como el del espacio virtual HAZLAB que usará el Laboratorio, incorporando nuevas funcionalidades o perfeccionando las previstas actualmente.

La Comunidad, que está dinamizada por un Profesor de Universidad, ya cuenta con su Plan de actividad para 2022, que incluye la celebración de Jornadas y encuentros, Actividades formativas, Intercambio de buenas prácticas, publicaciones, generación de aportaciones para el diseño de la plataforma de participación, desarrollo de procesos participativos piloto en la AGE y testeo y mejora del prototipo de laboratorio. Respecto a esta última actividad, como ya se ha indicado, la Comunidad está utilizando el espacio HAZLAB, del Laboratorio, para la celebración de sus reuniones e intercambio de documentación y aportaciones de sus miembros, por lo que este testeo también va a permitirnos introducir mejoras en el prototipo. **Otras novedades desde julio de 2021**

Además de las ya indicadas sobre la Plataforma y los laboratorios y la Comunidad de Práctica, las novedades más significativas son:

- Reunión del Pleno del Foro de Gobierno Abierto el pasado 10 de marzo, en cuyo orden del día se ha presentado y debatido la Memoria anual con el balance de la implementación del IV Plan de Gobierno Abierto. Esa Memoria se va a elevar al Consejo de Ministros para su posterior remisión al Congreso de los Diputados y al Senado en cumplimiento de la proposición no de ley y de la moción, respectivamente, aprobadas por las cámaras en 2020. En esta reunión, también se ha rendido cuentas sobre los avances del programa del Gobierno de España “Cumpliendo” y se ha informado sobre la organización de la Semana de la Administración Abierta en España, en el marco del programa impulsado por la OGP.

En esta reunión, se ha procedido también a la ratificación de la creación de la Comunidad de práctica y del Subgrupo de Trabajo para la reforma de la ley.

- Se han producido asimismo algunos avances en el cumplimiento de los compromisos e iniciativas del IV Plan (utilizar, en su caso, Guión de la reunión del Pleno). Si la Comisión está interesada no tenemos inconveniente en relatarlos en esta reunión. En todo caso, los enviaremos por escrito en el informe de seguimiento.

Checks and balances

34. In your written contribution, you provide details on the decisions issued by the Constitutional Court related to the state of alarm adopted at the beginning of the pandemic. Could you please provide details on the impact in practice of those decisions?

La sentencia del Tribunal Constitucional 148/2021, de 14 de julio, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.

Según el Tribunal Constitucional, las constricciones extraordinarias de la libertad de circulación por el territorio nacional que impuso el artículo 7 (apartados 1, 3 y 5) del Real Decreto 463/2020 se orientaban claramente a la protección de los valores e intereses constitucionalmente relevantes y se ajustaban a las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud en su documento *Actualización de la estrategia frente a la COVID-19* (14 de abril de 2020). El Tribunal también sostuvo que el supuesto de hecho ante el que el Gobierno se encontró, una crisis sanitaria, se ajustaba al supuesto del Estado de alarma previsto en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio (LOAES), que permite la limitación de ciertos derechos.

No obstante, el Tribunal consideró que la intensidad de la limitación que se había producido en el Real Decreto 463/2020 fue tal que el Gobierno hubiera debido declarar el estado de excepción, pese a que este se prevé en la LOAES para casos de desórdenes públicos y supone la suspensión (que no limitación) de derechos. El Tribunal Constitucional reiteró esta doctrina en la sentencia 183/2021, de 27 de octubre, aunque, en esta ocasión, entendió que no se había producido una suspensión de derechos sino una limitación proporcionada de los mismos.

El razonamiento de la STC 148/2021 no fue compartido por cuatro de los once miembros el Tribunal, que realizaron votos particulares. Los votos particulares sostuvieron, por un lado, que no procedía la declaración del estado de excepción porque la LOAES prevé la declaración del estado de alarma para los casos de crisis sanitaria. Por otro, defendieron que las medidas dispuestas por el Gobierno limitaban -no suspendían- derechos y se encontraban constitucionalmente justificadas en atención al fin legítimo perseguido, consistente en prevenir la expansión del virus entre la ciudadanía, y a su proporcionalidad.

En todo caso, la STC 148/2021 declaró la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 7, apartados 1, 3 y 5 del Real Decreto 463/2020.

El impacto práctico de esta doctrina del Tribunal Constitucional es el siguiente:

- Por un lado, impide al Gobierno decretar un estado de alarma con confinamiento domiciliario como el que ha sido declarado inconstitucional. Si fuera preciso adoptar dicha medida, por ejemplo, en supuestos de catástrofe natural o de nueva pandemia, el Gobierno debería decretar un estado de excepción según el Tribunal Constitucional.

Sin embargo, la naturaleza de los derechos que se pueden suspender como consecuencia de la declaración de un estado de excepción (los previstos en el artículo 55.1 CE), pone de manifiesto que el estado de excepción está pensado para ser aplicado en situaciones de conflicto social que dan lugar o pueden dar lugar a desórdenes públicos, y no para, por ejemplo, catástrofes naturales o crisis epidemiológicas. Además, una declaración de estado de excepción en estos casos, teniendo en cuenta sus límites temporales, no sería adecuada para responder a este tipo de situaciones que, como se ha podido comprobar durante la pandemia, se pueden extender por un periodo prolongado de tiempo. Según el artículo 116.3 CE, la duración del estado de excepción no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.

- Por otro lado, el Tribunal Constitucional modula los efectos de la declaración de nulidad de los apartados mencionados del artículo 7.

Según el Tribunal, la nulidad declarada no permite revisar ni los procesos concluidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada [arts. 161.1 a) CE y 40.1 LOTC]; ni las situaciones decididas mediante actuaciones administrativas firmes (STC 45/1989, de 20 de febrero, por razones de seguridad jurídica ex art. 9.3); ni las demás situaciones jurídicas generadas por la aplicación de los preceptos anulados.

Por el contrario, sí es posible la revisión en el caso de “los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad” (artículo 40.1 in fine LOTC). Esta excepción viene impuesta por el artículo 25.1 CE, pues estando vedada la sanción penal o administrativa por hechos que en el momento de su comisión no constituyan delito, falta o infracción administrativa, el mantenimiento de la sanción penal o administrativa que traiga causa en una disposición declarada nula vulneraría el derecho a la legalidad penal consagrado en el indicado precepto constitucional.

Finalmente, el Tribunal entiende que dicha declaración de inconstitucionalidad no es por sí misma título para fundar reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3.2 de la LOAES. Dicho precepto establece que “Quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes”.

Por lo tanto, tras la STC 148/2021, los ciudadanos pueden pedir ante la justicia ordinaria la revisión de los procesos contencioso-administrativos de los que ha resultado sanción por infringir las obligaciones contenidas en el artículo 7, apartados 1, 3 y 5, del Real Decreto 463/2020. También pueden presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración (solicitar indemnización) de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.

La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, deriva de una versión anterior de la misma ley, siendo ésta la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Se reformó en el año 2015 y ello generó diversas discrepancias a nivel político que motivaron la impugnación de algunos artículos ante el Tribunal Constitucional mediante un recurso de inconstitucionalidad presentado por 97 diputados de diversos grupos parlamentarios.

El Pleno del Tribunal Constitucional avaló en sentencia del año 2020 la constitucionalidad de la Ley, desestimando la mayoría de las impugnaciones (arts. 19.2, 20.2, 36.2, 37.1 en relación con los arts. 30.3, 37.3 y 7 así como la disposición final primera de la Ley Orgánica 4/2015).

Sí apreció por el contrario declarar la inconstitucionalidad y nulidad del inciso “no autorizado” del art. 36.23 de la LOPSC, que preveía como infracción grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de las autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La sentencia explica que hay censura previa proscrita por el art. 20.2 CE cuando la difusión de las imágenes o datos se sometan a un previo examen de su contenido por el poder público, de forma que aquélla (la difusión) solo se pueda realizar si éste “otorga el pláacet”. En consecuencia, “el art. 36.23 dado que sujeta a la obtención de autorización administrativa previa la actividad consistente en usar imágenes o datos de las autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, resulta contrario a la interdicción de censura previa ex art. 20.2 CE”

No obstante lo anterior, en la actualidad existe una **ponencia política** en el Congreso de los Diputados (Comisión de Interior) a partir de una iniciativa parlamentaria (Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana 122/000003 presentada por el Grupo Parlamentario Vasco) que se encuentra revisando el contenido de dicha norma.

La Tramitación seguida por la iniciativa es la siguiente:

- Boletín Oficial de las Cortes Generales: Publicación desde 15/01/2020 hasta 17/01/2020

- Gobierno Contestación: desde 17/01/2020 hasta 07/03/2020
- Pleno Toma en consideración: desde 07/03/2020 hasta 29/09/2020
- Mesa del Congreso: Acuerdo subsiguiente a la toma en consideración desde 29/09/2020 hasta 06/10/2020
- Comisión de Interior Publicación: desde 06/10/2020 hasta 09/10/2020
- Comisión de Interior Enmiendas: desde 09/10/2020 hasta 11/11/2021
- Comisión de Interior Mesa: Calificación desde 29/10/2020 hasta 23/12/2020
- Comisión de Interior: Debate de totalidad desde 23/12/2020 hasta 04/02/2021
- Comisión de Interior: Informe desde 11/11/2021

35. In your written contribution, you mention several initiatives aimed at increasing public participation in policy making (practice communities, the establishment of a platform, innovation labs, etc.). Could you please explain how those different initiatives interact between each other, as well as any developments since July 2021?
36. Could you please provide an update on the reform of the Citizen Security Law, including timing and next steps?